

Señores:

JUZGADO SEXTO (6°) CIVIL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN

E.S.D.

REFERENCIA: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

PROCESO: VERBAL RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DEMANDANTE: MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL Y OTROS
DEMANDADOS: ALLIANZ SEGUROS S.A. Y OTRO
RADICACIÓN: 190013103006-2021-00156-00

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor y vecino de Cali, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No.39.116 del C.S. de la J., obrando en calidad de Apoderado Especial de **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, de conformidad con la documentación que se aporta, encontrándome dentro del término legal, a través de este acto procedo a **CONTESTAR** la Demanda Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual, incoada por la señora **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL Y OTROS**, en contra de **ALLIANZ SEGUROS S.A. Y OTRO**; para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen en el presente escrito, según las pruebas que se practiquen, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones sometidas a consideración de su Despacho, de conformidad con lo que se consigna a continuación:

I. FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

FRENTE AL HECHO No. “1”: a mi mandante no le consta de manera directa las relaciones de parentesco que en este hecho se indican, toda vez que estas son circunstancias que atañen a la esfera íntima y personal del extremo demandante, por lo que le son desconocidas. Sin perjuicio de lo anterior, se observa que al plenario se allegaron los registros civiles de nacimiento de los señores Idalile María Sandoval Mosquera, Mario Alejandro Bastos Sandoval, Ana Sofía Bastos Espinosa, Claudia Yarely Bastos Sandoval, Danna Camila López Bastos, Santiago Andrés Bastos Sandoval, Diego Felipe Bastos Sandoval, Edward Sandoval Mosquera y el de la señora Hilda Margoth Sandoval Mosquera, conforme a los que se advierte que es cierto lo relativo al parentesco.

FRENTE AL HECHO No. “2”: a mi prohijada no le consta de manera directa si las relaciones del grupo familiar identificado en el hecho anterior, son estables, sólidas o funcionales, ni por cuáles valores estos se caracterizan como quiera que es una circunstancia que se relaciona con la esfera íntima y personal de los accionantes, de manera que le es desconocido. Será menester que la parte actora acredite esta aseveración, mediante los elementos de prueba idóneos, pertinentes y conducentes, luego que, revisado el expediente, no se observa prueba que demuestre lo indicado en este hecho.

FRENTE AL HECHO No. “3”: en este hecho se realizan varias apreciaciones frente a las cuales me pronunciaré de la siguiente manera:

- A mi representada no le consta directamente si el 17 de noviembre del 2019, a la altura del Kilómetro 26+660, vía Panamericana Popayán - Cali, en el sector de Quebrada Grande, el

señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** se desplazaba como conductor de la motocicleta de placa MWC 51E, ni mucho menos si la señora Mayra Alejandra Mosquera iba como pasajera de la misma, sin embargo, de acuerdo con lo plasmado en el Informe Policial de Accidente de Tránsito allegado con la demanda, se tiene que es cierta dicha afirmación.

- A mi mandante no le consta de manera directa si se habría producido el accidente de tránsito en los términos que aduce en este hecho, en tanto que son circunstancias en las que mi mandante no tuvo participación ni injerencia en absoluto, y que resultan ajenas al desarrollo normal de sus actividades, por lo que le son desconocidas. En ese sentido, será menester que la parte accionante acredite lo aquí manifestado mediante los elementos de convicción legalmente autorizados para el efecto.

Si bien, pretendiendo demostrar esta aseveración la actora allegó las documentales relativas al informe policial de accidentes de tránsito y un informe de reconstrucción de accidentes, es preciso indicar que, en primer lugar, el IPAT es un documento diligenciado por una persona que no fue testigo presencial, por lo que no tiene conocimiento directo frente a lo ocurrido y, en segundo lugar, lo que se registró en el informe policial de accidentes de tránsito, conforme fue aportado, no es suficientemente legible y no se puede apreciar con claridad su contenido. Por lo anterior, dichos elementos documentales no pueden ser tenidos como prueba válida para acreditar lo que aquí se afirma, siendo necesario que la demandante aporte medios de prueba idóneos, conducentes y pertinentes para tener por cierto este hecho.

En todo caso, es preciso advertir desde ya que, de tenerse estos elementos como medios de prueba válidos, en ellos se constata que el evento aparentemente habría tenido su génesis en una causa extraña, pues en el Informe Policial de Accidente de Tránsito que obra en el expediente se consignó la hipótesis No. 138 la cual hace referencia al acaecimiento de un accidente por niebla, lluvia o humo. Así mismo, se observa como causa probable (hipótesis) del accidente los conductores de los vehículos No.1 AUTOMÓVIL y No.2 MOTOCICLETA el código 304 “SUPERFICIE HÚMEDA; Cuando la vía o parte de ella se encuentra mojada”, y, aunque la determinación de las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio, es preciso advertir que la manifestación de la parte demandante no tiene ningún fundamento, ya que el mismo acaeció presuntamente como consecuencia de un hecho externo, imprevisible e irresistible como lo es un factor climático, que tuvo injerencia en el resultado final:

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO													
DEL CONDUCTOR		1 138		2		DEL VEHICULO DE LA VIA		1 304		2 304		DEL PEATON DEL PASAJERO	
OTRA						ESPECIFICAR ¿ CUAL?							

En este orden de ideas, se observa que el accidente de tránsito al que se refiere la demandante, se habría producido como resultado del acaecimiento de un evento externo, imprevisible e irresistible a la conducta del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, el cual configura consigo un caso fortuito, que enervaría cualquier responsabilidad que se pretenda en contra de la pasiva de esta acción.

De otro lado, en lo que respecta al informe de reconstrucción de accidentes, desde ya debe indicarse que este no tiene la virtualidad de ser un dictamen pericial por no cumplir con los requisitos señalados en los Artículos 226 y 227 del C.G.P., que la ley establece para valorar el concepto pericial emitido por las instituciones o profesionales especializados; claramente,

este fue relacionado en la demanda por el apoderado de la parte actora, como informes de carácter técnico, utilizados para soportar la supuesta responsabilidad en cabeza del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, por lo que el Despacho deberá separarse del INFORME de “Reconstrucción en 3D de accidente de tránsito” aportado por la parte actora, restándole totalmente valor probatorio, al no cumplir éste con los requisitos de carácter obligatorio que establece la normatividad procesal vigente.

Así las cosas, no constituyendo tal documento un dictamen pericial, es simplemente un informe emanado por un tercero, y de tal suerte, será necesario que la persona que lo emitió comparezca ante el Juzgador para efectos de ratificar su contenido, conforme lo dispuesto en el artículo 262 del Código General del Proceso, el cual faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria; si ello no ocurre, no se podrá conceder el valor probatorio pretendido a este documento y deberán tenerse como no demostrados todos los hechos planteados en la demanda que se justifiquen mediante el mismo.

- A mi prolijada no le consta cuál habría sido el presunto origen o causas del accidente, ni, concretamente, si en este habría tenido injerencia el vehículo de placa **DLP-452**, presuntamente conducido y de propiedad del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, como quiera que la aseguradora no tuvo ningún tipo de intervención en el mencionado evento. Sin embargo, de acuerdo con el informe policial de accidentes de tránsito que reposa en el plenario, se tendría como cierto el hecho de la presencia del vehículo en el accidente. No obstante, se aclara que lo relativo a la responsabilidad que pretende atribuirse con las afirmaciones de este hecho al codemandado, no corresponde a un hecho sino que se trata de apreciaciones eminentemente subjetivas de la parte accionante, sin embargo, de considerarse como tal, debe indicarse que NO es cierto o por lo menos no se encuentra probado que el conductor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ haya generado la colisión al invadir el carril contrario, pues de ser cierta dicha conducta, ineludiblemente, habría plasmado en la casilla correspondiente de la hipótesis, en ese caso “CONDUCTOR”, el código 104, que corresponde a la invasión del carril que viene en sentido contrario y que determina una presunta responsabilidad de dicho conductor, escenario que de ninguna manera se configuró en el presente caso.

A esto se suma, que, como se indicó en líneas precedentes, el presunto evento habría tenido lugar un hecho externo, imprevisible e irresistible como lo es un factor climático, que tuvo injerencia en el resultado final. En todo caso, se insiste en que la conclusión de las causas que dieron principio al accidente de tránsito, corresponde al fondo del presente litigio, ergo, no es admisible ningún juicio de valor en ese sentido; luego que es el Juzgador quien haciendo aplicación de las reglas de la lógica y la sana crítica, deberá valorar en conjunto todos los elementos de prueba incorporados al plenario y decidir de fondo.

- Finalmente, a mi mandante no le consta de manera directa si como resultado del presunto accidente el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** y la señora Mayra Alejandra Mosquera, habrían resultado lesionados, toda vez que son circunstancias en las que mi mandante no tuvo participación ni injerencia en absoluto, y que son extrañas al objeto comercial al que se dedica, por lo que le son desconocidas. Será indispensable que la accionante allegue los medios de convicción pertinentes para respaldar su dicho.

FRENTE AL HECHO No. “4”: lo manifestado en este numeral no es un hecho *per se*, se trata de un hecho revestido de apreciaciones subjetivas, ajenas al conocimiento de mi representada, pues la misma concurre al presente trámite como Compañía Aseguradora, sin que hubiere

presenciado o participado de forma alguna en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que han motivado la presentación de la demanda en este caso.

Ahora bien, pese a que a mi procurada no le consta de manera directa la ocurrencia del accidente que se refiere en este hecho, de la prueba documental que obra en el expediente, específicamente del Informe Policial de Accidente de Tránsito, se evidencia que el día 17 de noviembre de 2019, ocurrió un accidente de tránsito en el que se vio involucrado el vehículo de placa **DLP-452**, conducido por el señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, así mismo, se encuentra plasmado en el referido documento, que el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** conducía la motocicleta de placa MWC51E y como pasajera se desplazaba la señora Mayra Alejandra Mosquera.

No obstante, nótese que en este caso particular, los vehículos involucrados en el suceso ocurrido, se encontraban en el ejercicio de una actividad peligrosa, esto es, la conducción de vehículos y por tanto, la presunción sobre la culpa se neutraliza, conforme lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia y la doctrina, al indicar que la conducción de vehículos es una actividad de las denominadas peligrosas, y por ende la presunción sobre la culpa se neutraliza, teniendo la parte actora la carga de probar fehacientemente ese elemento subjetivo de la responsabilidad.

En todo caso, hay que tener en cuenta que no se encuentra debidamente demostrado que el conductor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ haya generado la colisión al invadir el carril contrario, pues de ser cierta dicha conducta, ineludiblemente, habría plasmado en la casilla correspondiente de la hipótesis, en ese caso “CONDUCTOR”, el código 104, que corresponde a la invasión del carril que viene en sentido contrario y que determina una presunta responsabilidad de dicho conductor, escenario que de ninguna manera se configuró en el presente caso. Por el contrario, en el IPAT se consignó la hipótesis No. 138 la cual hace referencia a accidentes ocurridos por niebla, lluvia o humo.

Igualmente, se observa como causa probable (hipótesis) del accidente los conductores de los vehículos No.1 AUTOMÓVIL y No.2 MOTOCICLETA el código 304 “SUPERFICIE HÚMEDA; Cuando la vía o parte de ella se encuentra mojada”, y, aunque la determinación de las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio, es preciso advertir que la manifestación de la parte demandante no tiene ningún fundamento, ya que el mismo acaeció presuntamente como consecuencia de un hecho externo, imprevisible e irresistible como lo es un factor climático, que tuvo injerencia en el resultado final.

Por tanto, al no estar adecuadamente acreditada la responsabilidad del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, será objeto del presente litigio determinar cuál de los dos conductores involucrados fue determinante para la producción del hecho de tránsito y consecuentemente, la calificación de responsabilidad corresponde emitirla al Juez, una vez sea valorada en conjunto las pruebas que se practiquen dentro del proceso.

Finalmente, itero que, en lo que respecta al informe de reconstrucción de accidentes, este no tiene la virtualidad de ser apreciado como un dictamen pericial por no cumplir con los requisitos señalados en los Artículos 226 y 227 del C.G.P., que la ley establece para valorar el concepto pericial emitido por las instituciones o profesionales especializados; claramente, este fue relacionado en la demanda por el apoderado de la parte actora, como informes de carácter técnico, utilizados para soportar los supuesta responsabilidad en cabeza del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, por lo que el Despacho deberá separarse del INFORME de “Reconstrucción en 3D de accidente de tránsito” aportado por la parte actora, restándole totalmente valor

probatorio, al no cumplir éste con los requisitos de carácter obligatorio que establece la normatividad procesal vigente.

Así las cosas, no constituyendo tal documento un dictamen pericial, es simplemente un informe emanado por un tercero, y de tal suerte, será necesario que la persona que lo emitió comparezca ante el Juzgador para efectos de ratificar su contenido, conforme lo dispuesto en el artículo 262 del Código General del Proceso, el cual faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria; si ello no ocurre, no se podrá conceder el valor probatorio pretendido a este documento y deberán tenerse como no demostrados todos los hechos planteados en la demanda que se justifiquen mediante el mismo.

FRENTE AL HECHO No. “5”: en este hecho se efectúan varias apreciaciones, frente a las cuales me pronunciaré de la siguiente manera:

- Se reitera que lo manifestado en este numeral no es un hecho, se trata de apreciaciones subjetivas y elucubraciones por parte del extremo actor, sin embargo, en el caso de que el Juzgador lo tenga como un hecho, se itera que, no es cierto o por lo menos no ha sido probado, que el conductor del vehículo de placa **DLP-452**, haya sido la responsable del accidente de tránsito, siendo ello el objeto de la Litis, por tanto, las afirmaciones de la parte actora, de un actuar imprudente del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, resulta siendo una valoración subjetiva, carente de soporte probatorio y abiertamente temeraria, lo cual se equivale a formular, anticipadamente, una pretensión del presente proceso, a la cual de antemano me opongo.
- De otro lado, en lo que respecta al supuesto intento de fuga por parte del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, debo indicar que, pese a que no le consta de manera directa a mi procurada la génesis, desarrollo y consecuencias de los hechos presuntamente acaecidos el 17 de noviembre del 2019, no es cierto o por lo menos no se encuentra probada tal aseveración de este numeral, de manera que la carga de su demostración recae única y exclusivamente sobre la parte actora, quien deberá acreditar sus dichos a través de los medios probatorios que consideren pertinentes.
- Finalmente, a mi mandante no le consta de manera directa si como resultado del presunto accidente el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** y la señora Mayra Alejandra Mosquera, habrían resultado lesionados, toda vez que son circunstancias en las que mi mandante no tuvo participación ni injerencia en absoluto, y que son extrañas al objeto comercial al que se dedica, por lo que le son desconocidas. Será indispensable que la accionante allegue los medios de convicción pertinentes para respaldar su dicho.

FRENTE AL HECHO No. “6”: en este hecho se efectúan varias apreciaciones, frente a las que me pronunciaré de la siguiente manera:

- Es cierto, sólo en cuanto a que, para la fecha de ocurrencia del accidente de tránsito, el automotor de placa **DLP-452** era conducido por el señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, sin embargo, respecto a las especificaciones físicas y técnicas de dicho rodante, así como la identificación del propietario, debe ser probado a través del respectivo certificado de tradición, que destaco, no obra en el plenario.
- De otro lado, debo aclarar que, si bien no se desconoce que es verdad que para el día de los hechos, el vehículo de placa **DLP-452** se encontraba amparado por un contrato de seguro expedido por mi prohijada, el cual se documentó en la **Póliza de Automóviles Autos Clónico**

No. 022371551 / 547, vigente desde el 31 de diciembre del 2018 hasta el 30 de diciembre del 2019, no puede pasarse por alto que, en todo caso, la existencia de dicho aseguramiento no implica que este pueda afectarse de manera automática por el mero hecho de existir, toda vez que para ello, es preciso que se cumplen las condiciones legales y contractuales de las que pende el mismo, coberturas, límites temporales Etc.; así mismo, depende de que no se materialicen causales de inoperatividad, anulabilidad, exclusión o ineficacia que eximan a mi prohijada de afectar la póliza por ella expedida.

En ese orden de ideas, estos serán los parámetros que determinen la eventual y remota obligación condicional de mi procurada, en indemnizar los perjuicios alegados por la parte actora; pues es evidente, que por la simple vinculación de la Compañía de Seguros que represento, como demandada en este proceso, no implica que se le pueda imponer la obligación de indemnizar a la parte demandante, toda vez que tal obligación solo surge en el momento en el que se realiza el riesgo asegurado, siempre y cuando no se configure alguna causal convencional o legal de exoneración, conforme a lo ya expuesto.

Dicho lo anterior, para el caso que nos ocupa, a pesar de la existencia de un contrato de seguro materializado en la **Póliza de Seguro de Automóviles Autos Clónico No. 022371551 / 547**, de acuerdo con la carátula de la misma, los hechos y pretensiones de la demanda presentadas, no configuran una obligación en cabeza de mi representada, por cuanto no existe prueba alguna que compruebe la realización del riesgo asegurado, que es precisamente la condición para que nazca la responsabilidad de indemnizar a cargo de la aseguradora.

En efecto el amparo de responsabilidad civil extracontractual otorgado y plasmado en la carátula de la mencionada póliza, opera siempre y cuando se demuestre fehacientemente la configuración de la responsabilidad civil extracontractual y consecuentemente, se acrediten debidamente los perjuicios alegados por los afectados; sin embargo, del acervo probatorio que obra en el plenario, únicamente se evidencia que existió colisión entre dos vehículos que desempeñaban una actividad peligrosa, sin que existan pruebas determinantes que permitan afirmar que el responsable de dicha colisión, haya sido el vehículo de placa **DLP452**, conducido por el señor **SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ**. Por lo anterior, el accidente de tránsito ocurrido el 17 de noviembre del 2019, no correspondió bajo ningún escenario a un siniestro amparado por la Póliza que mi mandante expidió.

FRENTE AL HECHO No. “7”: a mi mandante no le consta de manera directa la descripción del lugar en el cual habría acaecido el accidente de tránsito indicado en la demanda, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon el mismo, toda vez que son situaciones fácticas que superan la esfera del conocimiento que podría tener mi poderdante, por ser ajenos al desarrollo normal de sus actividades comerciales. En ese orden de ideas, la carga de su demostración recae única y exclusivamente sobre la parte actora, quien deberá acreditar tales afirmaciones a través de los medios probatorios que consideren pertinentes.

Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con el Informe de Accidente de Tránsito que milita en el plenario, se observa que el accidente ocurrió en la vía Piendamó - Tunía a la altura del kilómetro 26+660 m, del departamento del Cauca, identificándose las condiciones de la vía conforme se indica en este hecho.

FRENTE AL HECHO No. “8”: a mi procurada no le constan directamente las presuntas lesiones sufridas por el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, toda vez que no tiene ningún medio o canal que le permita conocer las mismas, de manera que la carga de su demostración

recae única y exclusivamente sobre los actores, quienes deberán acreditar tales afirmaciones a través de los medios probatorios que consideren pertinentes.

Debe aclararse en todo caso que, si bien con la demanda se allegó la Historia Clínica del demandante, y un dictamen de pérdida de capacidad laboral, con el que se pretende acreditar este particular, lo cierto es que, incluso en el evento en el que las mismas resultaran hipotéticamente probadas, su causación no puede resultar atribuible a la pasiva de esta acción, en tanto que la parte actora no ha cumplido con la carga demostrativa que le asiste en relación con los presupuestos básicos de la responsabilidad que pretende endilgar en esta causa.

FRENTE AL HECHO No. “9”: a mi procurada no le constan las presuntas lesiones sufridas por el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, ni el contenido del dictamen elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que en este hecho se cita, por cuanto mi representada no tuvo intervención en la elaboración de este. En todo caso, debe ser claro para el Despacho que el Informe Pericial de clínica Forense no constituye una prueba idónea para acreditar los días de incapacidad del demandante o si se disminuyó en efecto lo que se referiría a título de pérdida de la capacidad laboral, pudiendo ser ello únicamente estudiado a la luz de lo establecido en el manual único para la calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional.

Resalto en adición que los conceptos relacionados son cuestiones que deberán ser determinada por el médico tratante de la persona¹ o las Juntas de Calificación, correspondiendo al concepto de incapacidad médico legal a “(...) *el tiempo necesario que se requiere para hacer entrar la parte enferma en las condiciones que constituyen la salud para lograr la reparación biológica primaria(...)*”¹ y es “(...) *un criterio clínico con fines jurídicos, que establece un perito médico u odontólogo basado en el análisis sobre la gravedad del daño (características, magnitud de la lesión, compromiso estructural y/o funcional, entre otros) y el tiempo necesario para el proceso de reparación de la alteración orgánica y/o fisiopatológica ocasionada (...)*”².

Sumado a ello, cabe precisar que este documento tiene relevancia exclusiva en procesos penales³ y no tiene aplicación alguna para determinar la incapacidad laboral de una personas⁴. En este orden de ideas, se hace claro que la incapacidad médico legal no es un criterio que permita identificar el tiempo durante el cual una persona se ve obligada a suspender sus actividades de trabajo⁵.

FRENTE AL HECHO No. “10”: en este hecho se efectúan varias manifestaciones, frente a las cuales me pronunciaré de la siguiente manera:

- A mi prohijada no le consta directamente que el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** haya sido dictaminado con la pérdida de capacidad laboral reseñada en este hecho, ni mucho menos el contenido del dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación del Valle del Cauca, por cuanto es un documento que emana de un tercero, en el cual mi representada no tuvo intervención alguna, de manera que la carga de su demostración

¹ Reglamento Técnico para el Abordaje Integral de Lesiones en Clínica Forense. Código: DGM-RT-01-V01, Versión 01, octubre de 2010. Página 43.

² CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal, Bogotá, julio 24 de 1953. En: “Gaceta Judicial”, tomo LXXV, Págs. 709-711.

³ Reglamento Técnico para el Abordaje Integral de Lesiones en Clínica Forense. Código: DG-M-RT-01-V01, Versión 01, octubre de 2010. Pág. 47.

⁴ Reglamento Técnico para el Abordaje Integral de Lesiones en Clínica Forense. Código: DG-M-RT-01-V01, Versión 01, octubre de 2010. Pág. 14.

⁵ Medicina Legal. Sección preguntas frecuentes. Extraído de <http://www.medicinalegal.gov.co/preguntas-frecuentes>

recae única y exclusivamente sobre el demandante, quien deberá acreditar tales afirmaciones a través de los medios útiles, conducentes y pertinentes.

- A mi mandante no le consta si al señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, se le han causado los perjuicios de orden material e inmaterial que en este hecho se describen, en tanto que atañen a la esfera íntima y personal del accionante y son ajenos al desarrollo normal de las actividades comerciales de mi prohijada. No obstante, se advierte que, si bien esta afirmación pretende acreditarse mediante el dictamen de pérdida de capacidad emitido por la Junta Regional de Calificación del Valle del Cauca, y un informe de psicología emitido por la señora Nora Beatriz Menza Franco, lo cierto es que ambos documentos provienen de un tercero y hasta tanto no se ratifique su contenido por quien los emitió, no pueden considerarse como prueba válida en esta contienda; además, se resalta que, junto con el “informe de psicología” no se adjuntó ningún soporte que acredite, principalmente, la calidad de psicóloga de la señora Nora Beatriz Menza Franco, por lo que, no puede concedérsele a este documento la virtualidad probatoria pretendida.

FRENTE AL HECHO No. “11”: a mi representada no le consta si al señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** se le han causado quebrantos de orden emocional, conforme en este hecho se asevera; en efecto, estas circunstancias atañen a la esfera íntima y personal del referido actor y son extraños al desarrollo normal de las actividades comerciales de mi prohijada. No obstante, se advierte que, si bien esta afirmación pretende acreditarse mediante un informe de psicología emitido por la señora Nora Beatriz Menza Franco, lo cierto es que este documento proviene de un tercero y hasta tanto no se ratifique su contenido por quien lo emitió, no puede considerarse como prueba válida en esta contienda; además, se resalta que, junto con el mismo no se adjuntó ningún soporte que acredite, principalmente, la calidad de psicóloga de la señora Nora Beatriz Menza Franco, por lo que, no puede concedérsele a este documento la virtualidad probatoria pretendida.

También se deberá tener en cuenta que las atenciones médicas referidas por la presunta psicóloga, deben valorarse con estricta sujeción a lo consignado en la historia clínica que se haya aportado con la demanda.

FRENTE AL HECHO No. “12”: en este hecho se efectúan varias apreciaciones, frente a las cuales me pronunciaré de la siguiente manera:

- A mi procurada no le constan directamente las presuntas lesiones sufridas por el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, toda vez que no tiene ningún medio o canal que le permita conocer las mismas directamente, de manera que la carga de su demostración recae única y exclusivamente sobre los actores, quienes deberán acreditar tales afirmaciones a través de los medios probatorios que consideren pertinentes. Debe aclararse en todo caso que, si bien con la demanda se allegó la Historia Clínica del demandante y un dictamen de pérdida de capacidad laboral, con los que se pretende acreditar este particular, lo cierto es que, incluso en el evento en el que las mismas resultaran hipotéticamente probadas, su causación no puede resultar atribuible a la pasiva de esta acción, en tanto que la parte actora no ha cumplido con la carga demostrativa que le asiste en relación con los presupuestos básicos de la responsabilidad que pretende endilgar en esta causa.
- Se reitera que, en lo que respecta a la afirmación sobre la responsabilidad del conductor del vehículo de placa **DLP 452**, no corresponde a un hecho, sino que se trata de apreciaciones eminentemente subjetivas de la parte demandante. Sin embargo, de considerarse como tal, debe iterarse que no es cierto o por lo menos no se encuentra probado que el conductor

SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ haya generado la colisión al invadir el carril contrario, pues de ser cierta dicha conducta, ineludiblemente, habría plasmado en la casilla correspondiente de la hipótesis, en ese caso “CONDUCTOR”, el código 104, que corresponde a la invasión del carril que viene en sentido contrario y que determina una presunta responsabilidad de dicho conductor, escenario que de ninguna manera se configuró en el presente caso.

Conforme ya se advirtió previamente, en el Informe Policial de Accidente de Tránsito que obra en el expediente se consignó la hipótesis 138 la cual hace referencia a un accidente causado por la presencia de niebla, lluvia o humo. Así mismo, se observa como causa probable (hipótesis) del accidente los conductores de los vehículos No. 1 AUTOMÓVIL y No. 2 MOTOCICLETA el código 304 “SUPERFICIE HÚMEDA; cuando la vía o parte de ella se encuentra mojada”, y, aunque la determinación de las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio, es preciso advertir que la manifestación de la parte demandante no tiene ningún fundamento, ya que el mismo acaeció presuntamente como consecuencia de un hecho externo, imprevisible e irresistible como lo es un factor climático, que tuvo injerencia en el resultado final.

Por tanto, al no estar acreditada la responsabilidad del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, será objeto del presente litigio determinar cuál de los dos conductores involucrados fue determinante para la producción del hecho de tránsito y consecuentemente, la calificación de responsabilidad corresponde emitirla al Juez, una vez sea valorada en conjunto las pruebas que se practiquen dentro del proceso; así mismo, se deberá valorar lo relativo a la presunta existencia de los perjuicios que en este hecho se mencionan.

Ciertamente, en este caso, no es posible que a la pasiva se atribuya la “obligación de reparar” que aquí se deprecia, puesto que no se cumplen con los presupuestos jurídicos para la determinación de responsabilidad civil en contra de aquella. Ha indicado la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, que para ser posible la atribución de este tipo de responsabilidad, es indispensable la concurrencia de unos elementos sine qua non, estos son, un hecho dañoso, un daño y un nexo causal entre el daño y el hecho; debe acreditarse irrefutablemente el vínculo que une el hecho al daño acaecido, luego que, cuando este no está debidamente demostrado, se convierte en una circunstancia que imposibilita de soslayo la atribución de responsabilidad. En este tenor se ha pronunciado la H. Corte:

“(…) Esta Corte, con apoyo en el artículo 2341 del Código Civil, ha señalado como presupuestos axiológicos y concurrentes de la responsabilidad extracontractual, denominada también aquiliana, “(i) el perjuicio padecido; (ii) el hecho intencional o culposo atribuible al demandado; y (iii) la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre factores (...)”⁶

Del análisis del acervo probatorio que milita en el expediente, se advierte que no existe ninguna prueba que permita siquiera inducir la existencia de un nexo causal como presupuesto para la configuración de la responsabilidad civil extracontractual; por el contrario, sí se tienen elementos que permiten advertir la fractura o carencia del mentado requisito, y que, por contera, infieren la presencia de un eximente de responsabilidad, esto es: el caso fortuito. Luego que, conforme a lo expuesto precedentemente, en el hecho concurrió un evento ajeno a la conducta del señor SANTIAGO BEDOYA RAMIREZ, también irresistible e imprevisible, que habría conllevado a la ocurrencia del aludido accidente.

⁶ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia SC2107-2018 del 12 de junio del 2018. M.P.: Dr. Luis Armando Tolosa Villabona.

Por lo expuesto y bajo esta línea de pensamiento, se encuentra ausente uno de los elementos sine qua non para considerar procedente la determinación de la responsabilidad civil extracontractual de los accionados, y, por consiguiente, resulta inviable que aquellos se vean en la obligación de reparar el daño que en este caso se deprecia.

FRENTE AL HECHO No. “13”: a mi representada no le consta directamente la edad ni la actividad que presuntamente desempeñaba el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, para la fecha de los hechos, ni mucho menos el salario que este devengaba para entonces. Estas son circunstancias relativas a la esfera íntima y personal de la accionante y que no guardan relación con el objeto comercial al que se dedica mi prohijada, por lo que le son desconocidas; de manera que la carga de su demostración recae única y exclusivamente sobre la parte demandante.

Sin perjuicio de lo anterior, pese a que la “certificación de nómina” expedida por el tesorero general de la Policía Nacional y que se llagó a la demanda, por sí sola como documento, no acredita el ingreso del accionante, debe destacarse que, en todo caso, la suma de \$3.880.678,34, indicada en dicha constancia, hace referencia al salario devengado al momento de su emisión, esto es, el 31 de agosto del 2021 y no refiere que ese rubro haya sido el percibido por el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, al momento del accidente, el cual acaeció casi dos años atrás; en este orden de ideas, deberá acreditarse este particular debidamente por el extremo actor.

FRENTE AL HECHO No. “14”: se itera que a mi procurada no le constan directamente las presuntas lesiones sufridas por el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, toda vez que no tiene ningún medio o canal que le permita conocer las mismas directamente, de manera que la carga de su demostración recae única y exclusivamente sobre los actores, quienes deberán acreditar tales afirmaciones a través de los medios probatorios que consideren pertinentes. Debe aclararse en todo caso que, si bien con la demanda se allegó la Historia Clínica del demandante y un dictamen de pérdida de capacidad laboral, con los que se pretende acreditar este particular, lo cierto es que, incluso en el evento en el que las mismas resultaran hipotéticamente probadas, su causación no puede resultar atribuible a la pasiva de esta acción, en tanto que la parte actora no ha cumplido con la carga demostrativa que le asiste en relación con los presupuestos básicos de la responsabilidad que pretende endilgar en esta causa.

FRENTE AL HECHO No. “15”: no corresponde a un hecho; se trata de apreciaciones subjetivas, con las cuales la parte actora pretende fundar sus peticiones. En todo caso, los perjuicios de índole material supuestamente causados a la actora dependen en primer lugar, de la acreditación por la parte actora de la existencia de los elementos que estructuran este tipo de responsabilidad, como son el hecho, la culpa, el daño o perjuicio y la ineludible relación de causalidad entre el primero y éste último. Igualmente, este tipo de perjuicios no se presumen, no pueden ser especulativos ni imaginarios, y, por lo tanto, deben ser demostrados fehacientemente por quien los alega, de acuerdo con el principio procesal conocido como “*onus prodandi, incumbit actori*” y que de manera expresa se encuentra previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso.

De todos modos, es importante indicar que, de acuerdo con lo que en este hecho se manifiesta, como resultado del presunto accidente, el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** se ha visto imposibilitado para obtener recursos económicos necesarios para su subsistencia, no obstante, de acuerdo con la relación que se aportó con la demanda, en concreto con la certificación laboral emitida por la Policía Nacional, el accionante se encuentra laborando en dicha institución, percibiendo un salario de \$3.880.678,34, el cual se ha visto reducido por obligaciones propias del demandante, como a continuación se aprecia:

			DÍAS	DESCUENTOS
COTIZACION CAJA SUELDOS RETIRO	0.00	2	0	141,512.16
SANIDAD POLICIA	0.00	50	0	110,584.84
AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIBIE	0.00	10	0	13,100.00
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA (ASEGURADORA)	0.00	37	0	15,728.00
DESCUENTO NOVEDAD ORDEN PUBLICO	0.00		30	399,210.90
BANCOBBVA	72,000,606.00	416	0	1,358,502.00
SEGUPONALVOL	0.00	36	0	10,500.00
Devengado	Adicionales	Descuentos	Neto Pagado	
3.880.678,34	0,00	2.049.137,90	1.831.540,44	

De manera que, no resulta válida la afirmación de que, como resultado de los hechos supuestamente acaecidos el 17 de noviembre del 2019, el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, hubiera dejado de percibir un ingreso económico que le permitiera su subsistencia, puesto que la misma prueba documental por él incorporada acreditaría que con posterioridad al evento reprochado, sí continuó recibiendo ingresos.

FRENTE AL HECHO No. “16”: a mi mandante no le consta directamente si el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, percibía o no ingresos para la fecha de los hechos, ni mucho menos a qué destinaba los mismos, se trata de situaciones que se circunscriben a la esfera personal del actor, por lo que deberá acreditarlas fehacientemente; máxime porque, si bien en el expediente se allegó una certificación laboral, no es un documento que permita establecer que el actor destinaba el ingreso mensual que en el mismo se consigna, para contribuir a los gastos del hogar o los demás propósitos que en este hecho se relacionan.

Se reitera que, los perjuicios de índole material supuestamente causados a la actora dependen en primer lugar, de la acreditación por la parte actora de la existencia de los elementos que estructuran este tipo de responsabilidad, como son el hecho, la culpa, el daño o perjuicio y la ineludible relación de causalidad entre el primero y éste último. Igualmente, este tipo de perjuicios no se presumen, no pueden ser especulativos ni imaginarios, y, por lo tanto, deben ser demostrados fehacientemente por quien los alega, de acuerdo con el principio procesal conocido como “*onus prodandi, incumbit actori*” y que de manera expresa se encuentra previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso.

FRENTE AL HECHO No. “17”: en este hecho se efectúan varias apreciaciones, frente a las cuales me pronunciaré de la siguiente manera:

- A mi representada no le consta si al señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** se le han causado las lesiones descritas en esta demanda, ni mucho menos si, como resultado de las mismas, se generaron los perjuicios de tipo “moral y psicológico” al grupo familiar de aquel; efecto, estas circunstancias atañen a la esfera íntima y personal del referido actor y de su familia y son extraños al desarrollo normal de las actividades comerciales de mi prohijada. No obstante, se advierte que, de acuerdo con la revisión del plenario, no hay ninguna prueba que permita concluir que a los demandantes relacionados como familiares del señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, se les causó un perjuicio de la naturaleza deprecada.

Ciertamente no obra en el expediente Historia Clínica ni dictamen o concepto médico, que infiera siquiera que los familiares de la víctima directa han sido víctimas de un quebranto en su salud de naturaleza psicológica, que han tenido tratamiento o seguimiento por psicología, derivado de los hechos que aquí se demandan. Como podrá observar el Despacho, esta aseveración se encuentra carente de prueba que permita tenerla por cierta, por lo que deberá tenerse por no demostrada.

- A mi mandante no le consta de manera directa si los familiares del señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, relacionados como demandantes en este asunto, han brindado a aquel el apoyo y acompañamiento que aquí se asevera, sin embargo, al plenario no se incorporó ningún elemento de convicción que lo acredite, por lo que deberá tenerse por no demostrado.

FRENTE AL HECHO No. “18”: no corresponde a un hecho, sino a un comentario o manifestación jurídica del apoderado de la parte actora. Al respecto se debe indicar que en este caso no se encuentra acreditado el nexo causal necesario para que surta una imputación de responsabilidad a cargo de la parte actora y, por lo tanto, las afirmaciones realizadas en el libelo de la demanda son meras presunciones subjetivas. Por lo tanto, el contenido material en el caso particular deberá ser analizado por el Juez, con el valor probatorio que éste le asigne al examinarlo junto con los otros medios de prueba que se aporten al proceso, con el fin de poder descubrir, mediante pruebas idóneas, pertinentes y conducentes, la verdadera causa que originó la colisión.

No obstante, nótese que en este caso particular, los vehículos involucrados en el suceso ocurrido, se encontraban en el ejercicio de una actividad peligrosa, esto es, la conducción de vehículos y por tanto, la presunción sobre la culpa se neutraliza, conforme lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia y la doctrina, al indicar que la conducción de vehículos es una actividad de las denominadas peligrosas, y por ende la presunción sobre la culpa se neutraliza, teniendo la parte actora la carga de probar fehacientemente ese elemento subjetivo de la responsabilidad.

Además, hay que tener en cuenta que no se encuentra debidamente demostrado que el conductor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ haya generado la colisión al invadir el carril contrario, pues de ser cierta dicha conducta, ineludiblemente, habría plasmado en la casilla correspondiente de la hipótesis, en ese caso “CONDUCTOR”, el código 104, que corresponde a la invasión del carril que viene en sentido contrario y que determina una presunta responsabilidad de dicho conductor, escenario que de ninguna manera se configuró en el presente caso. Por el contrario, en el IPAT se consignó la hipótesis No. 138 la cual hace referencia a accidentes ocurridos por niebla, lluvia o humo.

Se observa como causa probable (hipótesis) del accidente los conductores de los vehículos No.1 AUTOMÓVIL y No.2 MOTOCICLETA el código 304 “SUPERFICIE HÚMEDA; Cuando la vía o parte de ella se encuentra mojada”, y, aunque la determinación de las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio, es preciso advertir que la manifestación de la parte demandante no tiene ningún fundamento, ya que el mismo acaeció presuntamente como consecuencia de un hecho externo, imprevisible e irresistible como lo es un factor climático, que tuvo injerencia en el resultado final.

Por tanto, al no estar adecuadamente acreditada la responsabilidad del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, será objeto del presente litigio determinar cuál de los dos conductores involucrados fue determinante para la producción del hecho de tránsito y consecuentemente, la calificación de responsabilidad corresponde emitirla al Juez, una vez sea valorada en conjunto las pruebas que se practiquen dentro del proceso.

Finalmente, itero que, en lo que respecta al informe de reconstrucción de accidentes, este no tiene la virtualidad de ser apreciado como un dictamen pericial por no cumplir con los requisitos señalados en los Artículos 226 y 227 del C.G.P., que la ley establece para valorar el concepto pericial emitido por las instituciones o profesionales especializados; claramente, este fue relacionado en la demanda por el apoderado de la parte actora, como informes de carácter

técnico, utilizados para soportar los supuesta responsabilidad en cabeza del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, por lo que el Despacho deberá separarse del INFORME de “Reconstrucción en 3D de accidente de tránsito” aportado por la parte actora, restándole totalmente valor probatorio, al no cumplir éste con los requisitos de carácter obligatorio que establece la normatividad procesal vigente.

Así las cosas, no constituyendo tal documento un dictamen pericial, es simplemente un informe emanado por un tercero, y de tal suerte, será necesario que la persona que lo emitió comparezca ante el Juzgador para efectos de ratificar su contenido, conforme lo dispuesto en el artículo 262 del Código General del Proceso, el cual faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria; si ello no ocurre, no se podrá conceder el valor probatorio pretendido a este documento y deberán tenerse como no demostrados todos los hechos planteados en la demanda que se justifiquen mediante el mismo.

FRENTE AL HECHO No. “19”: no me consta la pérdida de capacidad laboral reseñada por el actor, ni el contenido del dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación del Valle del Cauca, por cuanto es un documento que emana de un tercero, en el cual mi representada no tuvo intervención alguna, de manera que la carga de su demostración recae única y exclusivamente sobre el demandante, quien deberá acreditar tales afirmaciones a través de los medios útiles, conducentes y pertinentes.

Debe aclararse en todo caso que, incluso en el hipotético evento en el que el Juzgador tuviera como válido dicho documento, y que la pérdida de la capacidad se acreditara, su causación no puede resultar atribuible a la pasiva de esta acción, en tanto que la parte actora no ha cumplido con la carga demostrativa que le asiste en relación con los presupuestos básicos de la responsabilidad que pretende endilgar en esta causa.

FRENTE AL HECHO No. “20”: lo consignado en este numeral no corresponde a un hecho, sino a la liquidación del lucro cesante que de manera antitécnica, el apoderado de la actora plasma en este acápite. Frente a lo anterior, debo manifestar que me opongo al reconocimiento de la suma liquidada, y adicionalmente, que revisada la misma, se observa que adolece de error grave al desconocer la técnica de liquidación fijada por la H. Corte Suprema de Justicia de Colombia, así como también fundamentarse en datos que no son veraces, razón por la cual debe desestimarse.

En primer lugar, se deberá tener en consideración que, pese a que la liquidación efectuada en este numeral, toma como base el salario que, presuntamente, el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** devengaba para la fecha de los hechos, justificada en la “certificación de nómina” expedida por el tesorero general de la Policía Nacional y que se llagó a la demanda, lo cierto es que, este documento por sí solo no acredita el ingreso del accionante. En efecto, la suma de \$3.880.678,34, indicada en dicha constancia, hace referencia al salario devengado al momento de su emisión, esto es, el 31 de agosto del 2021 y no refiere que ese rubro haya sido el percibido por la víctima al momento del accidente, el cual acaeció casi dos años atrás; en este orden de ideas, deberá acreditarse este particular debidamente por el extremo actor.

En segundo lugar, el reconocimiento de la suma solicitada, especialmente por concepto de lucro cesante futuro, es claramente improcedente, pues si partimos de la definición misma de lucro cesante descrita en el artículo 1614 del Código Civil como “(...) **la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento (...)**” negrita por fuera del texto original; se tiene

palmariamente que, en el caso que nos ocupa, no se es posible hablar de la materialización de este perjuicio, habida cuenta de que, además de que no existen elementos que acrediten la responsabilidad de la parte pasiva, adicionalmente, se tiene que se aportó una certificación laboral que desacredita la causación de este perjuicio.

Es importante aclarar y resaltar que, de acuerdo con lo que a lo largo de la demanda se manifiesta, como resultado del presunto accidente, el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** se ha visto imposibilitado para obtener recursos económicos necesarios para su subsistencia, no obstante, de acuerdo con la relación que se aportó con el libelo genitor, en concreto con la certificación laboral emitida por la Policía Nacional, el accionante se encuentra laborando en dicha institución, percibiendo un salario de \$3.880.678,34, el cual se ha visto reducido por obligaciones propias del demandante, como a continuación se aprecia:

			DÍAS	DESCUENTOS
COTIZACION CAJA SUELDOS RETIRO	0.00	2	0	141,512.16
SANIDAD POLICIA	0.00	50	0	110,584.84
AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIBIE	0.00	10	0	13,100.00
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA (ASEGURADORA)	0.00	37	0	15,728.00
DESCUENTO NOVEDAD ORDEN PUBLICO	0.00		30	399,210.90
BANCOBBVA	72,000,606.00	416	0	1,358,502.00
SEGUPONALVOL	0.00	36	0	10,500.00
Devengado	Adicionales	Descuentos	Neto Pagado	
3.880.678,34	0,00	2.049.137,90	1.831.540,44	

De manera que, no resulta válida la afirmación de que, como resultado de los hechos supuestamente acaecidos el 17 de noviembre del 2019, el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, hubiera dejado de percibir un ingreso económico que le permitiera su subsistencia, puesto que la misma prueba documental por él incorporada acreditaría que con posterioridad al evento reprochado, sí continuó recibiendo ingresos. Así entonces, desacreditada se encuentra la aseveración que el hecho demandando causó un lucro cesante consolidado o futuro al accionante, puesto que este mismo confesó con la incorporación de este documento, que no ha dejado de percibir ingresos.

FRENTE AL HECHO No. 21, IDENTIFICADO EN LA DEMANDA COMO SEGUNDO HECHO No. “20”: no corresponde a un hecho; se trata de un comentario o manifestación jurídica del apoderado de la parte actora, en la cual se cita una norma derogada. Sin perjuicio de lo anterior, se reitera que, determinar si existe o no una responsabilidad civil extracontractual en cabeza de los demandados, corresponde únicamente al Juez como director del proceso, en virtud de las pruebas allegadas al mismo. Por lo tanto, los demandantes no pueden encargar responsabilidad al extremo pasivo, sin acreditar los elementos que la componen en el desarrollo del proceso.

II. **PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

FRENTE A LA PRETENSIÓN “PRIMERA”: me opongo a la prosperidad de esta pretensión, en la cual se requiere el reconocimiento de responsabilidad civil en contra del señor SANTIAGO BEDOYA RAMIREZ en calidad de conductor y propietario del vehículo de placa **DLP-452**, y de mi prohijada **ALLIANZ SEGUROS S.A.** en calidad de compañía aseguradora del referido automotor, en virtud de los hechos acaecidos el 17 de noviembre del 2019, en los que el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** presuntamente habría resultado lesionado. En efecto se trata de una pretensión basada en un presupuesto fáctico carente de medios de prueba determinantes y suficientes que permitan acreditar la deprecada responsabilidad. Como aquí se abordará, lo que se tiene demostrado en este proceso es que el evento acaeció por un hecho

exógeno a la voluntad del demandado, imprevisible e irresistible a aquel, circunstancia que lo libera de la responsabilidad señala la actora.

En primer lugar, en lo que atañe al fondo del asunto, si bien se observa que, pretendiendo demostrar los hechos demandados la actora allegó las documentales relativas al informe policial de accidentes de tránsito y un informe de reconstrucción de accidentes, es preciso indicar que, en primer lugar, el IPAT es un documento diligenciado por una persona que no fue testigo presencial, por lo que no tiene conocimiento directo frente a lo ocurrido, en segundo lugar, lo que se registró en el informe policial de accidentes de tránsito, conforme fue aportado, no es suficientemente legible y no se puede apreciar con claridad su contenido, y en tercer lugar, este no concluye, mediante elementos de prueba recolectados y de manera definitiva y contundente, cuál fue la génesis del aludido accidente, de manera que con fundamento en aquel no es posible concluir sin lugar a duda razonable las conclusiones que eleva el extremo accionante frente a la presunta existencia de responsabilidad civil extracontractual. Por lo anterior, dicho elemento documental no puede ser tenido como prueba válida para acreditar lo que aquí se afirma, siendo necesario que la demandante aporte medios de prueba idóneos, conducentes y pertinentes para tener por cierto este hecho.

Es vital resaltar que, en lo que atañe al informe policial de accidentes de tránsito, jurisprudencialmente se ha establecido que no puede ser asimilado a un informe pericial, en tanto que no comporta la naturaleza demostrativa suficiente para tener como probado un hecho. Frente a este asunto ha dicho la H. Corte Constitucional que: “(...) *El marco normativo y el manual permiten establecer que el informe policial de accidente de tránsito **no es un informe pericial**, sino un informe descriptivo. Este informe, a su vez, tiene unos criterios de evaluación propios, **que no son los establecidos por el CPG o el CPACA para este tipo de prueba** (...)*”⁷ Negrita por fuera del texto original.

De tal suerte, dicho documento no es prueba suficiente ni mucho menos determinante sobre la génesis, desarrollo y desenlace de los hechos reprochados; de manera que, no puede válidamente esperar el accionante que dicho informe sea suficiente para acreditar la responsabilidad civil extracontractual que en este punto se pretende en contra del señor SANTIAGO BEDOYA RAMIREZ, ni mucho menos de mi prihijada. Tal documento, en cuanto a su contenido material, deberá ser debatido dentro del curso procesal respectivo, y tendrá el valor probatorio que el funcionario judicial le asigne, después de analizar todos y cada uno de los posibles escenarios en los que haya ocurrido el evento, con el fin de descubrir mediante las pruebas idóneas, pertinentes y conducentes, la causa eficiente que lo originó.

De otro lado, en lo que respecta al informe de reconstrucción de accidentes, desde ya debe indicarse que este no tiene la virtualidad de ser un dictamen pericial por no cumplir con los requisitos señalados en los Artículos 226 y 227 del C.G.P., que la ley establece para valorar el concepto pericial emitido por las instituciones o profesionales especializados; claramente, este fue relacionado en la demanda por el apoderado de la parte actora, como informes de carácter técnico, utilizados para soportar los supuesta responsabilidad en cabeza del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, por lo que el Despacho deberá separarse del INFORME de “Reconstrucción en 3D de accidente de tránsito” aportado por la parte actora, restándole totalmente valor probatorio, al no cumplir éste con los requisitos de carácter obligatorio que establece la normatividad procesal vigente.

⁷ CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-475 del 2018, M. P.: Dr. Alberto Rojas Ríos.

Así las cosas, no constituyendo tal documento un dictamen pericial, es simplemente un informe emanado por un tercero, y de tal suerte, será necesario que la persona que lo emitió comparezca ante el Juzgador para efectos de ratificar su contenido, conforme lo dispuesto en el artículo 262 del Código General del Proceso, el cual faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria; si ello no ocurre, no se podrá conceder el valor probatorio pretendido a este documento y deberán tenerse como no demostrados todos los hechos planteados en la demanda que se justifiquen mediante el mismo.

Por lo anterior, será indispensable que el Juzgador tenga en consideración todos los elementos de convicción que convergen en este proceso antes de arrojar sus conclusiones sobre la génesis, desarrollo y desenlace de los hechos presuntamente acontecidos el 17 de noviembre del 2019; puesto que no es posible con la recolección de meros indicios, informes e imágenes no concluyentes atribuir a la pasiva de esta acción una responsabilidad que no se encuentra fehacientemente demostrada.

Ahora, en el evento de que el Juzgador decidiera otorgar a estos documentos el valor probatorio pretendido por el extremo accionante, como ya se anticipó anteriormente, lo que revelan dichos elementos documentales, es que el evento que aquí se reprocha, habrían tenido lugar, como resultado de un hecho externo a la voluntad del señor SANTIAGO BEDOYA RAMIREZ conductor del vehículo de placa **DLP-452** que de ninguna manera le es atribuible. Ciertamente, en el Informe Policial de Accidente de Tránsito que obra en el expediente se consignó la hipótesis No. 138 la cual hace referencia al acaecimiento de un accidente producido por la presencia de niebla, lluvia o humo. Así mismo, se observa como causa probable (hipótesis) del accidente los conductores de los vehículos No.1 AUTOMÓVIL y No.2 MOTOCICLETA el código 304 “SUPERFICIE HÚMEDA; cuando la vía o parte de ella se encuentra mojada”, y, aunque la determinación de las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio, es preciso advertir que la manifestación de la parte demandante no tiene ningún fundamento, ya que el mismo acaeció presuntamente como consecuencia de un hecho externo, imprevisible e irresistible como lo es un factor climático, que tuvo injerencia en el resultado final:

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO											
DEL CONDUCTOR		1 138		DEL VEHÍCULO		1 304		DEL PEATÓN			
2				DE LA VÍA		2 304		DEL PASAJERO			
OTRA				ESPECIFICAR ¿ CUAL?							

En este orden de ideas, se observa que el accidente de tránsito al que se refiere la demandante, se habría producido como resultado del acaecimiento de un evento externo, imprevisible e irresistible a la conducta del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, el cual configura consigo un caso fortuito, que enervaría cualquier responsabilidad que se pretenda en contra de la pasiva de esta acción.

Por lo expuesto, es claro que el evento no se presentó por negligencia o impericia del demandado, sino que aparentemente se habría producido como resultado del acaecimiento de un evento externo, imprevisible e irresistible a la conducta de aquel, que, por lo tanto, no le puede resultar atribuible, y por contera, tampoco a las demás que conforman el extremo pasivo, como quiera que, se reitera, éste implicaría la configuración de un eximente de responsabilidad concretado en un hecho fortuito.

De acuerdo con el precedente jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia, cuando la fuerza mayor o el caso fortuito provienen de eventos de la naturaleza, como habría sucedido en este caso, se encuentra probado el eximente de responsabilidad, cuando el conductor del vehículo ha cumplido con las medidas de cuidado, en procura de evitar el daño, y si a pesar de ello el accidente acontece. De suerte que el hecho se torna irresistible e inevitable, ya que, en palabras de la H. Corte “(...) *lo imprevisible no es lo que [no] haya pasado previamente por la mente del demandado, sino aquello que sucede pese a haberse tomado todas las medidas tendientes a evitar el daño (...)*”⁸.

Así, el hecho relativo a las condiciones climáticas, como es apenas evidente, resulta una situación que se encuentra por fuera del control y previsibilidad del demandando, y lo que se observa es que el conductor del vehículo que me mi mandante aseguró, fue precavido en la conducción del automotor el día de los hechos; en ese orden de ideas, ya que, de acuerdo a lo que la H. Corte Suprema de Justicia ha advertido sobre este particular, cuando el conductor ha cumplido con las medidas de cuidado, en procura de evitar el daño, y si a pesar de ello el accidente acontece, se exonera de responsabilidad, diáfano resulta concluir que, frente a la pasiva de esta acción no existe obligación alguna que pueda exigirse en su contra.

Dicha Corporación ha dejado claro que, la responsabilidad de quien causa el daño se presume, salvo si este acredita la concurrencia de situaciones que lo eximen de la misma, tales como: la culpa exclusiva de la víctima, la fuerza mayor o caso fortuito, o la intervención de un elemento extraño. En sentencia del 25 de octubre de 1999 expediente 5012, la H. Corte, se refirió al tema de la siguiente manera:

“(...) a la víctima le basta demostrar los hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligrosa y el perjuicio sufrido y será el demandado quien deba comprobar que el accidente ocurrió por la imprudencia exclusiva de la víctima, por la intervención de un elemento extraño, o por la fuerza mayor o caso fortuito ya que el ejercicio de una actividad peligros, por su naturaleza, se lleva envuelto el de culpa en caso de accidente (...)”⁹

Habiendo ocurrido un acontecimiento externo al círculo de la actuación del agente (en este caso el conductor del vehículo que mi mandante aseguró), que reúne las características de imprevisibilidad y de inevitabilidad, siendo para aquel imposible materializar un resultado distinto, ciertamente, se encuentra que la supuesta responsabilidad que se pretende endilgar al señor SANTIAGO BEDOYA RAMIREZ, no es más que una manifestación subjetiva de la parte actora, que no se ha demostrado, puesto que la inevitabilidad e imprevisibilidad del cambio en las condiciones climáticas, probado con lo plasmado en el informe policial, rompe el nexo causal entre el hecho y el supuesto daño. De suerte que contrario a la tesis que mantiene la parte actora, de ninguna manera se encuentra estructurada la responsabilidad alegada, pues la misma se desdibuja por configurarse el eximente del caso fortuito.

Se resalta que frente al presunta violación a las normas de tránsito por invasión de carril que adujo la parte actora en los hechos de la demanda, se trata solamente de una mera especulación, que no está respaldada bajo elemento documental técnico que lo acredite. Como es apenas evidente, es esencial que, para demostrar este escenario, se alleguen al plenario los medios de prueba técnicos y científicos idóneos, que con certeza afirmen que el vehículo de placa **DLP-452** se desplazaba incumpliendo las normas de tránsito; y en ese sentido, en tanto que hasta esta

⁸ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia SC17723-2016. Radicación n° 05001-3103-011-2006-00123-02. M.P. Dr. Luis Alonso Rico Puerta.

⁹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia del 25 de octubre de 1999, expediente 5012.

etapa procesal no se ha allegado dicha prueba, no se podrá tener por cierto que el evento lesivo se presentó de la forma como se describe por el extremo accionante.

Resulta sustancial mencionar en este punto que, la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia ha indicado que, para ser posible la atribución de responsabilidad civil extracontractual, es indispensable la concurrencia de unos elementos *sine qua non*, estos son, un hecho dañoso, un daño y un nexo causal entre el daño y el hecho; debe acreditarse irrefutablemente el vínculo que une el hecho al daño acaecido, luego que, cuando este no está debidamente demostrado, se convierte en una circunstancia que imposibilita de soslayo la atribución de responsabilidad. En este tenor se ha pronunciado la H. Corte:

*“(...) Esta Corte, con apoyo en el artículo 2341 del Código Civil, ha señalado como presupuestos axiológicos y concurrentes de la responsabilidad extracontractual, denominada también aquiliana, “(i) el perjuicio padecido; (ii) el hecho intencional o culposo atribuible al demandado; y (iii) **la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre factores**”.*

*7.4.1. En cuanto atañe al tipo de responsabilidad civil descrito en el cargo, la misma corresponde a la prevista en el artículo 2356 del Código Civil, esto es, la originada por el ejercicio de actividades peligrosas, la cual consagra una presunción de responsabilidad que opera en favor de la víctima de un daño causado producto de una labor riesgosa, aspecto que la releva de probar su existencia de la culpa en el acaecimiento del accidente y, por tanto, **para que el autor del mismo sea declarado responsable de su producción, sólo le compete demostrar la conducta o hecho antijurídico, el daño y la relación de causalidad entre éste y el perjuicio.** Por ello, es el sendero en nuestro ordenamiento de múltiples actividades que entrañan una franca y creciente responsabilidad objetiva (...)*¹⁰ Negrita por fuera del texto original.

Del análisis del acervo probatorio que milita en el expediente, se advierte que o hay prueba suficiente que permita inducir de manera concluyente y definitiva la existencia de un nexo causal como supuesto para la configuración de la responsabilidad civil extracontractual. En consecuencia, ante la ausencia de los elementos de la misma, las pretensiones de la demanda deben necesariamente fracasar. En todo caso, se recuerda que, la determinación de las causas que dieron origen al accidente de tránsito y a las lesiones y secuelas que del mismo presuntamente se derivaron, corresponde al fondo del presente litigio, y en ese sentido, no es admisible ningún juicio de valor frente al particular; luego que es el Juzgador quien haciendo aplicación de las reglas de la lógica y la sana crítica, debe valorar en conjunto todos los elementos de prueba incorporados al plenario y decidir de fondo.

En segundo lugar, en lo que atañe a mi representada, debo aclarar que, si bien no se desconoce que es verdad que para el día de los hechos, el vehículo de placa **DLP-452** se encontraba amparado por un contrato de seguro expedido por mi prohijada, el cual se documentó en la **Póliza de Automóviles Autos Clónico No. 022371551 / 547**, vigente desde el 31 de diciembre del 2018 hasta el 30 de diciembre del 2019, no puede pasarse por alto que, en todo caso, la existencia de dicho aseguramiento no implica que este pueda afectarse de manera automática por el mero hecho de existir, toda vez que para ello, es preciso que se cumplen las condiciones legales y contractuales de las que pende el mismo, coberturas, límites temporales Etc.; así mismo,

¹⁰ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia SC2107-2018 del 12 de junio del 2018. M.P.: Dr. Luis Armando Tolosa Villabona.

depende de que no se materialicen causales de inoperatividad, anulabilidad, exclusión o ineficacia que eximan a mi prohijada de afectar la póliza por ella expedida.

Consecuentemente, estos serán los parámetros que determinen la eventual y remota obligación condicional de mi procurada, en indemnizar los perjuicios alegados por la parte actora; pues es evidente, que por la simple vinculación de la Compañía de Seguros que represento, como demandada en este proceso, no implica que se le pueda imponer la obligación de indemnizar a la parte demandante, toda vez que tal obligación solo surge en el momento en el que se realiza el riesgo asegurado, siempre y cuando no se configure alguna causal convencional o legal de exoneración, conforme a lo ya expuesto.

Dicho lo anterior, para el caso que nos ocupa, a pesar de la existencia de un contrato de seguro materializado en la **Póliza de Seguro de Automóviles Autos Clónico No. 022371551 / 547**, de acuerdo con la carátula de la misma, los hechos y pretensiones de la demanda presentadas, no configuran una obligación en cabeza de mi representada, por cuanto, como ya se argumentó y justificó, no existe prueba alguna que compruebe la realización del riesgo asegurado, que es precisamente la condición para que nazca la responsabilidad de indemnizar a cargo de la aseguradora. Al respecto, se debe resaltar que amparo de responsabilidad civil extracontractual se circunscribió de la siguiente manera:

6. Responsabilidad Civil Extracontractual

La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el lucro cesante y daño moral, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados, que cause el asegurado o el conductor autorizado con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley, proveniente de un accidente de tránsito ocasionado por el vehículo descrito en esta póliza.

El valor asegurado, señalado en la carátula de la póliza, representa el límite máximo de la indemnización a pagar por daños a bienes de terceros y/o muerte o lesiones a terceras personas. Este monto asegurado se considera como límite único combinado restituible por evento.

En efecto el amparo de responsabilidad civil extracontractual otorgado y plasmado en la carátula de la mencionada póliza, opera **siempre y cuando se demuestre fehacientemente la configuración de la responsabilidad civil extracontractual** y consecuentemente, se acrediten debidamente los perjuicios alegados por los afectados; sin embargo, del acervo probatorio que obra en el plenario, únicamente se evidencia que existió colisión entre dos vehículos que desempeñaban una actividad peligrosa, sin que existan pruebas determinantes que permitan afirmar que el responsable de dicha colisión, haya sido el vehículo de placa **DLP452**, conducido por el señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ. Por lo anterior, **el accidente de tránsito ocurrido el 17 de noviembre del 2019, no correspondió bajo ningún escenario a un siniestro amparado por la Póliza que mi mandante expidió.**

Finalmente, sin que implique de ninguna manera aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada, en gracia de discusión, de darse por realizado el riesgo asegurado, es menester indicar que el seguro cuenta con los límites y las exclusiones que se hayan pactado con el asegurado, por lo tanto, no es posible que se condene de forma solidaria cuando solo puede responder hasta donde lo establecido en el contrato de seguro se permita.

En orden de lo expuesto, solicito respetuosamente al Juzgador negar esta pretensión por no estar probada la responsabilidad que equivocadamente aquí se señala en contra del señor SANTIAGO BEDOYA RAMIREZ, se lo absuelva a aquel y a mi prohiada de las pretensiones invocadas en la demanda.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “SEGUNDA”: respetuosamente manifiesto que me opongo a que se condene al señor SANTIAGO BEDOYA RAMIREZ y a mi mandante **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, al pago de los perjuicios que se aducen en esta pretensión, toda vez que, como ya se explicó densamente en el pronunciamiento sobre la pretensión anterior, no existe prueba fehaciente que acredite los elementos esenciales para que se estructure la responsabilidad civil extracontractual contenida en el artículo 2341 del Código Civil, pues para ello es necesario que la parte actora acredite la existencia de un hecho dañoso, un daño, y una relación de causalidad entre el primero y el segundo, situación que no sucedió en el presente caso. De hecho, lo que se encontró por probado, es que el accidente de tránsito se presentó en razón a circunstancias ajenas al conductor del vehículo de placa **DLP-452**, las cuales fracturaron el elemento del nexo causal, y que configuran un eximente de responsabilidad de toda la pasiva de esta acción.

Expuesto lo anterior, me pronunciaré respecto de cada uno de los conceptos sobre los cuales fue solicitada una indemnización, de la siguiente manera:

- **Frente al concepto de perjuicios materiales:**

Se presentó primer lugar, una solicitud indemnizatoria por la suma total de **\$12.121.299**, por concepto de **daño emergente**, la cual se discriminó así: **(i)** \$6.800.000 por la pérdida total de la motocicleta de placa MWC 51E; y **(ii)** \$5.321.299, por los gastos de transporte posteriores a la fecha de ocurrencia del accidente, que corresponden a los desplazamientos de la víctima y de sus familiares para atender diligencias relacionadas con el estado de salud.

En ese orden de cosas, se debe señalar que, para que proceda una indemnización por este concepto, no basta con manifestar que, con ocasión del supuesto perjuicio, que se endilga haber causado los demandados, se ha incurrido en una serie de gastos, sino que es deber de la parte actora probar de manera idónea e inequívoca, en primer lugar, que efectivamente se ha incurrido en esos gastos, aportando las facturas o documentos equivalentes con todos los requisitos exigidos por la Ley, y en segundo lugar, que dichos gastos guarden una relación directa con los hechos manifestados con la demanda, y en el caso de marras, tenemos que los documentos con los cuales se pretende soportar los supuestos gastos en que ha incurrido el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, no cumplen con los requisitos que establece el Estatuto Tributario y la DIAN, para que sean considerados facturas o documentos equivalentes.

Ahora bien, frente a cada uno de los conceptos y sumas reclamadas a título de daño emergente por la parte actora, es pertinente realizar los siguientes cuestionamientos:

- i) **Pérdida total de motocicleta.** Ahora bien, respecto al pago que se solicita a título de daño emergente, por la suma de **\$6.800.000**, por concepto de la pérdida total de la motocicleta de placa MWC 51E; es importante precisar que conceptualmente, el daño emergente está definido como aquellos valores que salen del patrimonio de una persona, como consecuencia de determinado hecho, que genera o representa un detrimento económico para sí. De allí que, las meras expectativas que no puedan cuantificarse, tal y como ocurre en este caso, donde se aporta un simple extracto de la guía de valores del Fasecolda, en la que se relaciona el valor de la referida motocicleta, no puedan catalogarse como un daño emergente, susceptible de reconocimiento económico, pues **nada comprueba que la motocicleta haya quedado inservible**, es decir que haya sido

una pérdida total; de hecho, en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito se indicó que la motocicleta solo “(...) presenta daños lateral derecho (...)”, conforme se advierte a continuación:

Formulario de Informe Policial de Accidentes de Tránsito. Sección 0.2 VEHICULO. Placa: MWC-515. Marca: GATON. Modelo: 2018. Color: SIN. Carrocería: 16. Licencia de Trans No. 10014513853. Tarjeta de Registro No. 14515100002960. Aseguradora: SEGUROS DEL COMERCIO S.A. Descripción de daños materiales del vehículo: presenta daños lateral derecho.

En segundo lugar, bajo el hipotético supuesto de haberse producido la pérdida total, de todos modos, no se probó que ello representaría una pérdida en el patrimonio del demandante, puesto que no se aportó el certificado de tradición de la motocicleta, o la licencia de propiedad siquiera, que acredite que el vehículo era de su propiedad para la fecha de los hechos.

ii) **Por el valor de los transportes.** En lo que atañe a los gastos de transporte, en cuantía de \$5.321.299. Como se expresó en líneas precedentes, para que sea reconocida una indemnización por daño emergente, es imperioso demostrar de manera fehaciente, que quien pretende tal indemnización en efecto sufrió un desmedro en su patrimonio. Tal demostración debe realizarse por medio de los documentos que legalmente acrediten la erogación, tal como una factura o un documento equivalente, este último aparejado del RUT de quien lo expide. La parte actora pretende que con la sola relación de unos valores que aportó con la demanda sea tenida en cuenta como soporte, siendo que con ello no se está acreditando ningún perjuicio, ni tampoco constituye un documento idóneo para su demostración, lo cual hace imposible su reconocimiento.

También se relacionaron cuatro cuentas de cobro emitidas, presuntamente por el señor Juan Davis Chávez Contreras, en las que se consigna que la víctima directa le debe la suma total de \$4.380.000, por concepto de transporte en el vehículo de placa KLQ407, desde el día 24 de marzo del 2020 al 27 de julio del 2020; sin embargo, no se acompañó junto con dichas cuentas de cobro, la cédula de quien la emitió, el certificado de tradición o licencia del automotor en el cual se realizó el transporte, ni mucho menos, la relación de las supuestas citaciones médicas o la constancia de asistencia a las mismas.

Finalmente, señalo que, en tanto que todos estos documentos, con los que se pretende acreditar la causación del daño emergente, provienen de terceros, deberá comparecer ante su Despacho la persona que los emitió, con el propósito de que, conforme lo establece el artículo 262 del Código General del Proceso, se ratifique su contenido; puesto que esta norma faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria, conforme se procederá a solicitar al Juzgador.

Con todo, recuerdo que el daño emergente corresponde a la pérdida económica por la destrucción a puesta en peligro del bien jurídico y todos aquellos gastos, erogaciones o desembolsos que necesariamente debe hacer una persona para atender todo lo relacionado con la vulneración del mismo o las secuelas que este deja. En este caso, en la demanda se habla de unos gastos sin respaldos probatorios suficientes, de manera que hay ninguna comprobación de que los mismos se hayan casados, por lo que de entrada es una petición indemnizatoria cuyo reconocimiento trasciende imposible, haciéndose menester que el Juzgador despache desfavorablemente esta pretensión.

De otra parte, se solicitó a favor del señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** la suma **\$48.260.285,6** a título de **lucro cesante consolidado** y de **\$392.124.285,25**, por **lucro cesante futuro**. Montos a los que me opongo rotundamente a su reconocimiento, puesto que, por deficiencia probatoria, trasciende a todas luces imposible de atender.

Primero que nada, se observa que la liquidación efectuada por la parte demandante adolece de error grave al desconocer la técnica de liquidación fijada por la H. Corte Suprema de Justicia de Colombia, así como también fundamentarse en datos que no son veraces, razón por la cual debe desestimarse. En segundo lugar, se deberá tener en consideración que, pese a que la liquidación efectuada en la demanda, toma como base el salario que, presuntamente, el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** devengaba para la fecha de los hechos, justificada en la “certificación de nómina” expedida por el tesorero general de la Policía Nacional y que se llagó a la demanda, lo cierto es que, este documento por sí solo no acredita el ingreso del accionante. En efecto, la suma de \$3.880.678,34, indicada en dicha constancia, hace referencia al salario devengado al momento de su emisión, esto es, el 31 de agosto del 2021 y no refiere que ese rubro haya sido el percibido por la víctima al momento del accidente, el cual acaeció casi dos años atrás; en este orden de ideas, deberá acreditarse este particular debidamente por el extremo actor.

En tercer lugar, el reconocimiento de la suma solicitada, especialmente por concepto de lucro cesante futuro, es claramente improcedente, pues si partimos de la definición misma de lucro cesante descrita en el artículo 1614 del Código Civil como “(...) *la ganancia o provecho **que deja de reportarse** a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento (...)*” negrita por fuera del texto original; se tiene palmariamente que, en el caso que nos ocupa, no se es posible hablar de la materialización de este perjuicio, habida cuenta de que, además de que no existen elementos que acrediten la responsabilidad de la parte pasiva, adicionalmente, se tiene que se aportó una certificación laboral que desacredita la causación de este perjuicio.

Es importante aclarar y resaltar que, de acuerdo con lo que a lo largo de la demanda se manifiesta, como resultado del presunto accidente, el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** se **ha visto imposibilitado para obtener recursos económicos** necesarios para su subsistencia, no obstante, de acuerdo con la relación que se aportó con el libelo genitor, en concreto con la certificación laboral emitida por la Policía Nacional, el accionante se encuentra laborando en dicha institución, percibiendo un salario de \$3.880.678,34, el cual se ha visto reducido por obligaciones propias del demandante, como a continuación se aprecia:

			DÍAS	DESCUENTOS
COTIZACION CAJA SUELDOS RETIRO	0.00	2	0	141,512.16
SANIDAD POLICIA	0.00	50	0	110,584.84
AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIBIE	0.00	10	0	13,100.00
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA (ASEGURADORA)	0.00	37	0	15,728.00
DESCUENTO NOVEDAD ORDEN PUBLICO	0.00		30	399,210.90
BANCOBVA	72,000,606.00	416	0	1,358,502.00
SEGUPONALVOL	0.00	36	0	10,500.00
Devengado	Adicionales	Descuentos	Neto Pagado	
3.880.678,34	0,00	2.049.137,90	1.831.540,44	

De manera que, no resulta válida la afirmación de que, como resultado de los hechos supuestamente acaecidos el 17 de noviembre del 2019, el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, hubiera dejado de percibir un ingreso económico que le permitiera su subsistencia, puesto que la misma prueba documental por él incorporada acreditaría que con posterioridad al evento reprochado, sí continuó recibiendo ingresos. Así entonces, desacreditada se encuentra la aseveración que el hecho demandando causó un lucro cesante consolidado o futuro al accionante, puesto que este mismo confesó con la incorporación de este documento, que no ha dejado de percibir ingresos.

No puede pasarse por alto que en lo que atañe al lucro cesante, la H. Corte Suprema de Justicia, ha trazado algunas pautas para su entendimiento, y al respecto dijo: “(...) *En efecto, en cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual* (...)”¹¹ Negrita por fuera del texto original.

Frente al lucro cesante futuro, la H. Corte Suprema de Justicia, en Sentencia 055 de 24 de junio de 2008, explicó lo siguiente:

“(...) *En efecto, en cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. Ahora, sin ahondar en la materia, porque no es del caso hacerlo, esa certidumbre no se opone a que, en determinados eventos, v. gr. **Lucro cesante futuro, el requisito mencionado se concrete en que el perjuicio sea altamente probable, o sea, cuando es posible concluir, válidamente, que verosímilmente acaecerá, hipótesis en la cual cualquier elucubración ha de tener como punto de partida una situación concreta, tangible, que debe estar presente al momento de surgir la lesión del interés jurídicamente tutelado*** (...)”¹² Negrita por fuera del texto original.

En ese mismo sentido, mediante fallo del 8 de agosto del 2013 en cuanto a las manifestaciones que puedan darse sobre tal perjuicio, la Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia sostuvo que el lucro cesante:

“(...) *vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinsa en una situación real, existente al momento del evento dañino, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente* (...)”¹³ Negrita por fuera del texto original.

¹¹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia 055 de 24 de junio del 2008, Expediente 2000-01141-01.
¹² CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia 055 de 24 de junio del 2008, Expediente 2000-01141-01.
¹³ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia del 8 de agosto del 2013, Expediente 11001-3103-003-2001-01402-01.

En otras palabras, el rubro lucro cesante no indemniza la pérdida basada en una mera expectativa o probabilidad de beneficios económicos, **sino el daño que supone privar la obtención de dividendos a los cuales habría tenido derecho la víctima de no haber ocurrido el hecho,** pero bajo el esquema de una privación de ganancia cierta. Por lo tanto, existe un razonable juicio de posibilidad, relativo a la concreción de un resultado útil donde se combinan la certidumbre y la fluctuación, pero partiéndose de la base de que el afectado se hallaba en una posición de privilegio que le permitiría obtener un beneficio, y el actuar ilícito de otra persona le impide fructificar tal situación de prosperidad. Entonces demostrado una vez demostrado el hecho y el daño, es preciso que se acredite que el demandante, de manera incuestionable, se encuentra privado de percibir un ingreso económico; situación que, conforme lo expuesto arriba se desacreditó en este caso.

De tal suerte, es evidente que, con la con la manifestación esbozada en esta pretensión indiscutiblemente el extremo actor desea lucrarse, pues un eventual reconocimiento a título de lucro cesante consolidado o futuro, resultaría en sumo grado injustificado, por la carencia de pruebas de la demanda aportada, lo cual cimienta esta oposición. Por lo que la liquidación resulta, además, exagerada y carente de soporte probatorio adicional que la demuestre, y en ese sentido, debe tenerse como mal realizada, y la petición indemnizatoria debe negarse.

• **Frente al concepto de perjuicios inmateriales:**

El extremo demandante solicita una indemnización por concepto de **daño moral**, por la suma total de **480 SMMLV**, discriminados así:

DAÑO MORAL		
DEMANDANTE	PARENTESCO CON LA VÍCTIMA DIRECTA	VALOR
MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL	Víctima directa	100 SMMLV
ANA SOFIA BASTOS ESPINOSA	Hija	80 SMMLV
IDALILE MARIA SANDOVAL MOSQUERA	Madre	80 SMMLV
CLAUDIA YARELLY BASTOS SANDOVAL	Hermana	50 SMMLV
DANNA CAMILA LOPEZ BASTOS	Hija	35 SMMLV
SANTIAGO ANDRES BASTOS SANDOVAL	Hermano	50 SMMLV
DIEGO FELIPE BASTOS SANDOVAL	Hermano	50 SMMLV
EDWARD SANDOVAL MOSQUERA	Primo	35 SMMLV

Pretensión frente a la que me opongo, toda vez que, en primer lugar, como se ha venido reiterando, no se cumplen los requisitos para que surja la responsabilidad que pretende la parte actora en este litigio.

En segundo lugar, no se han allegado al expediente elementos de prueba con la virtualidad demostrativa suficiente para dar por acreditado la causación de este perjuicio en los términos de la demanda. Si bien con el escrito genitor se allegó la Historia Clínica de la víctima directa y un informe psicológico, en la que se registró que aquel habría sido evaluado por psicología (en los que se manifestó por el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** haber sufrido un detrimento emocional por los hechos acaecidos el 17 de noviembre del 2019), lo cierto es que, extrañamente, el informe se elaboró hasta casi dos años después de ocurrido el accidente. Como podrá observar el Juzgador, el evento aquí reprochado habría sucedido el 17 de noviembre del 2019, y la consulta a la que acudió el demandante, habría sido para el mes de septiembre del 2021, de manera que no se conoce a ciencia cierta si fue en efecto el evento aquí demandado el que habría causado la condición psicológica en la que se aduce que se encuentra el accionante.

Si ello hubiera sido así, las reglas de la experiencia y la lógica dictan que se habría presentado la necesidad de acudir al psicólogo, mucho tiempo antes, cuando el evento había apenas ocurrido; sin embargo, en este caso no se explica por qué el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** acude al tratamiento ya transcurrido más de un año del aludido accidente; por lo que no guarda suficiente credibilidad lo referente a esta documentación.

De otro lado, no hay absolutamente ninguna prueba que permita la acreditación del supuesto daño moral de los familiares de los demandantes, en concreto en relación con aquellos que se encuentran en el segundo y tercer grado de consanguinidad, frente a los cuales el perjuicio moral no es susceptible de presumirse. En efecto, no obra Historia Clínica o dictamen por psicología o siquiera concepto médico que permita inferir la producción del daño emocional y psicológico que se aduce sufrieron los hermanos y el primo del señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, por lo que es una manifestación que no puede tenerse por cierta.

Se debe tener en cuenta que el perjuicio moral no opera de manera automática, ante la ocurrencia de un hecho dañoso, ni se presume en todos los casos; de allí que corresponda al Juez, dentro de un análisis minucioso, objetivo y detallado de la situación, concluir si se acreditó o no la existencia de tal perjuicio, y acto seguido, de encontrarlo probado, le corresponderá determinar su cuantía, atendiendo lógicamente a criterios razonables y proporcionales que no generen un enriquecimiento injustificado a favor de los demandantes, en un franco desmedro de la contraparte.

Con relación este perjuicio, la H. Corte Suprema de Justicia expone que, para acceder a su pago, este debe tasarse con base en lo siguiente: “(...) *la incidencia del daño “en la esfera particular de la persona”; con la afectación que le causó en “su comportamiento” y “sus sentimientos”; con la generación de “aflicción, soledad, (...) abandono e incluso (...) repudio familiar o social”; y con “las circunstancias especiales que rodearon este proceso (...)”*¹⁴.

Básicamente, el reconocimiento de este concepto tiene como finalidad otorgar a la víctima una satisfacción íntima que borre y compense la angustia y el dolor sufrido por un hecho dañoso. No obstante, la suma por éste perjuicio es determinada única y exclusivamente por el Juez en la sentencia, con base en lo establecido jurisprudencialmente y según las pruebas aportadas al proceso; para ello, la parte demandante deberá acreditar los elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual y, como consecuencia, existirá eventualmente el pago o indemnización por el daño y los perjuicios que se prueben; en caso de reconocerse dicho concepto, deberá ajustarse a los límites fijados por la H. Corte Suprema de Justicia, a través de la cual hay senda jurisprudencia en torno a los montos del resarcimiento cuando se reclaman perjuicios inmateriales.

En este punto, considero esencial que el Despacho tenga en cuenta el precedente jurisprudencial, luego que, cuando se ha probado fehacientemente el tipo de perjuicio que en este caso alega, la H. Corte Suprema de Justicia ha manifestado que,

“(...) Perjuicio inmaterial por daño moral. En lo atañadero al perjuicio moral subjetivo se reconocerá porque resulta indudable la aflicción y congoja que a Diana Carolina Beltrán Toscano le produce la secuela dejada por el accidente de marras consistente en «perturbación psíquica de carácter permanente» y «deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanentes» [fl. 12 c-5], pues es profundamente penoso, mucho más para una dama en la flor de su juventud, ver en su cuerpo cicatrices que antes del insuceso no

¹⁴ SC16690-2016, Radicación n.º 11001-31-03-008-2000-00196-01 Magistrado Ponente: Álvaro Fernando García Restrepo (10 de mayo de 2016)

estaban y **ser consiente que sus funciones psicológicas se encuentran alteradas no transitoriamente sino por el resto de sus días**, así la estética médica logre arrasarlos, lo cual conlleva al quebrantamiento indiscutible de caros derechos de la personalidad y de la autoestima.

(...) **Recuerda la Corte, éste perjuicio no constituye un «regalo u obsequio gracioso», tiene por propósito reparar «(...) in casu con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa», de acuerdo con el ponderado arbitrio iudicis, «sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia, derrotero y compromiso ineludible de todo juzgador» , por tanto, es procedente fijar el monto de la condena por este aspecto en la suma de quince millones de pesos (\$15.000.000) (...)»¹⁵**. Negrita por fuera del texto original.

Así entonces, frente a los perjuicios que se derivan de las presuntas lesiones del señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** se encuentra que en un escenario en el que el perjuicio ha sido superior al que en este caso se indica por el accionante (conforme a lo pretendido y probado específicamente en este concepto indemnizable de la demanda), la H. Corte Suprema de Justicia ha determinado el valor máximo de **\$15.000.000** para la víctima directa y para aquellos en el primer grado de consanguinidad, monto mucho menor al que aspira el actor. Por ello, surge menester que en el eventual e hipotético caso de reconocerse que hay lugar a indemnizar el daño que se aduce se ha ocasionado como resultado de las presuntas lesiones de aquella, su reparación se otorgue, una vez esté diáfana y probada la responsabilidad de la demandada, confrontando el precedente jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia en la materia y limitándolo a los montos que a derecho correspondan.

También se deberán tener en cuenta los parámetros establecidos por el órgano de cierre de la Jurisdicción Civil, quien estipuló en Sentencia SC15996-2016 de noviembre 29 de 2016, un tope máximo de **\$60.000.000 en caso de muerte**, siendo este un criterio para ir determinando gradualmente el perjuicio en caso de lesiones, de suerte que, de ninguna manera, la petición de las actoras podría superar si quiera el 50% del mencionado valor.

No está de más recordar que es el Juez en el desarrollo de la etapa probatoria quien determinará si efectivamente hubo responsabilidad a cargo de los aquí demandados, y en caso de que este improbable suceso ocurra, atendiendo las circunstancias específicas del caso, entrará a determinar el verdadero grado de afectación del demandante y fijará los montos de indemnización a que haya lugar, sin que estos puedan exceder los límites fijados por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Civil, respecto de la reparación o compensación de los perjuicios inmateriales, en este caso, frente al daño moral.

Con todo, en gracia de discusión, y sin que implique reconocimiento de responsabilidad en ningún sentido, solicito al Juez de la manera más respetuosa que, tenga en cuenta que, para la tasación de este perjuicio, sólo si eventualmente y remotamente hay lugar a ello, debe ajustarse a los límites jurisprudencialmente establecidos, atendiendo a criterios razonables y proporcionales que no generen un enriquecimiento injustificado en favor del demandante, en un franco desmedro de la contraparte.

Solicito respetuosamente, negar esta pretensión.

¹⁵ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia SC5885-2016 del 06 de mayo del 2016. M.P.: Dr.: Luis Armando Tolosa Villabona.

De otro lado, se solicitó en la demanda una indemnización por concepto de **daño fisiológico o a la vida de relación**, por la suma total de **480 SMMLV**, discriminados así:

DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN		
DEMANDANTE	PARENTESCO CON LA VÍCTIMA DIRECTA	VALOR
MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL	Víctima directa	100 SMMLV
ANA SOFIA BASTOS ESPINOSA	Hija	80 SMMLV
IDALILE MARIA SANDOVAL MOSQUERA	Madre	80 SMMLV
CLAUDIA YARELLY BASTOS SANDOVAL	Hermana	50 SMMLV
DANNA CAMILA LOPEZ BASTOS	Hija	35 SMMLV
SANTIAGO ANDRES BASTOS SANDOVAL	Hermano	50 SMMLV
DIEGO FELIPE BASTOS SANDOVAL	Hermano	50 SMMLV
EDWARD SANDOVAL MOSQUERA	Primo	35 SMMLV

Pretensión frente a la cual reitero que me opongo rotundamente al no estar debidamente acreditada la responsabilidad indemnizatoria en contra de la pasiva de esta acción; además, no hay elementos que nos lleven a considerar como cierta la causación del perjuicio que se aduce.

Como se advirtió precedentemente, si bien con la demanda se allegó la Historia Clínica de la víctima directa en la que se registró que aquel habría estado acudiendo a controles por psicología, estos iniciaron más de un año después de ocurrido el accidente; de manera que no se conoce a ciencia cierta si fue en efecto el evento aquí demandado el que habría causado la condición psicológica en la que se aduce que se encuentra el accionante. Las reglas de la experiencia y la lógica dictan que, de haber un nexo causal, se habría presentado la necesidad de acudir al psicólogo, mucho tiempo antes, cuando el evento había apenas ocurrido; sin embargo, en este caso no se explica por qué el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** acude al tratamiento ya transcurrido más de un año del aludido accidente; por lo que no guarda suficiente credibilidad lo referente a esta documentación.

Y de otro lado, si bien obra un dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral este no evidencia un estado de invalidez o una pérdida de capacidad total ni permanente, que le imposibilite de manera definitiva al señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** desarrollar actividades laborales, sociales y familiares de una manera suficientemente adecuada. Es un porcentaje que permite inferir que puede tener una vida en condiciones suficientemente normales. Además, los controles por psicología, los cuales habrían derivado a la determinación del porcentaje indicado, se iniciaron por la demandante cuando ya había transcurrido más de un año del accidente de tránsito, por lo que realmente no existían elementos suficientes para que si quiera se determinara el porcentaje que la Junta concluyó.

Por lo dicho, es indispensable que el Despacho tenga en consideración todos los demás elementos de prueba que se alleguen al plenario, para efectos de definir lo relativo al origen de la pérdida de capacidad de la accionante, y su nexo causal con los hechos que aquí se demandaron.

No está de más resaltar que el daño a la vida de relación es un concepto que hace parte de los perjuicios extrapatrimoniales, distinto al de índole moral, concebido como aquel que se le ocasiona a la persona **privándola de la posibilidad de realizar actividades cotidianas**, que con anterioridad al hecho dañoso podía realizar sin ningún inconveniente, en palabras de la H. Corte Suprema de Justicia:

*“(…) esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida **de la víctima**, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad (...)”¹⁶.* Negrita por fuera de texto original.

Debe tenerse en cuenta igualmente, que es un concepto indemnizable que no se presume, por lo que recae sobre la parte actora la carga de probar el sustento fáctico en que funda la misma, teniendo en cuenta la finalidad de la acción indemnizatoria, cual es, reparar los perjuicios sufridos no más ni menos de lo que resulte probado. En ese sentido se pronunció la H. Corte Suprema de Justicia, la cual no reconoció la indemnización por el daño a la vida de relación en tanto los demandantes no probaron las actividades a las que supuestamente **la víctima directa** se vio impedido de realizar en razón a las lesiones sufridas en un accidente de tránsito. En la mencionada sentencia esa colegiatura refirió:

*“(…) Señálese que, con el fin de evitar antojadizas intuiciones pergeñadas a la carrera para sustentar condenas excesivas, **la determinación del daño en comentario debe atender a las «las condiciones personales de la víctima, apreciadas según los usos sociales, la intensidad de la lesión, la duración del perjuicio»** (SC5885, 6 may. 2016, rad. n.º 2004-00032-01), aspectos todos ausentes de prueba en la foliatura (...)”*

*En consecuencia, **ante la ausencia de certeza sobre la forma en que se torpedeó la interacción social del demandante, resulta inviable acceder a una condena por este aspecto**, ya que para esto habría que hacer juicios hipotéticos que impiden la configuración del deber de reparar. Recuérdese que «[l]a condición de reparabilidad está dada por la certidumbre y gravedad suficiente del daño y no por pertenecer a alguna subcategoría específica»¹⁷ (...)”¹⁸* Negrita por fuera de texto original.

Se colige de lo anterior, que el daño a la vida de relación como perjuicio autónomo, eventualmente **se reconoce a la víctima directa**, siempre y cuando se demuestre su efectiva realización, en tanto que no es objeto de presunción, probando que antes del hecho dañoso realizaba actividades que de alguna manera hacían más agradable la vida pero que a raíz del suceso se encuentra impedido para realizarlas nuevamente. De manera que este es un concepto que puede ser reconocido únicamente a la víctima directa de una lesión y no a los familiares de la misma; por lo que el perjuicio solicitado a los demás accionantes trasciende improcedente.

Se resalta en todo caso que, si bien el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** indica que se le causaron unas secuelas que repercuten en su vida diaria y explica en este acápite cuáles fueron dichas secuelas y cómo es que las mismas tienen incidencia en el desarrollo normal de sus actividades diarias, no se identifica ni aborda cómo es que ese mismo escenario causó un daño fisiológico o a la vida de relación de los demás demandantes, ni qué actividades realizaban aquellos antes del evento y por qué es que a raíz del accidente ya no les es posible practicarlas. En ese orden de ideas, se deberá tener en cuenta que el eventual resarcimiento de los supuestos perjuicios por daño a la vida de relación, debe estar completamente delimitado a la demostración del mismo, y que este nunca podrá ser superior a la verdadera magnitud del daño causado.

¹⁶ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 13 de mayo de 2008. Ref.: 11001 3103 006 1997 09327 01. M.P.: César Julio VALENCIA COPETE.

¹⁷ ENRIQUE BARROS BOURIE, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Ed. Jurídica de Chile, 2009, p. 291.

¹⁸ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 07 de diciembre de 2018. Rad. 2003-00833-01. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

Concretamente, debe destacarse que la suma pretendida resulta abiertamente desproporcionada, y contraría los parámetros establecidos por la H. Corte Suprema de Justicia. En efecto, la mentada Corporación en Sentencia SC2107-201810, resolvió el daño a la vida de relación en la suma equivalente a **25 SMMLV**, como a continuación se reseña, en un caso donde la pérdida de la capacidad laboral ascendía al 39.45%, es decir, comportando casi igual gravedad para la víctima. Brevemente se reseña que la citada Corte resolvió la indemnización de perjuicios reclamadas con ocasión a un accidente donde al actor le fue amputada la pierna derecha. La sentencia que puso fin al proceso resolvió frente al citado daño lo siguiente:

“(…) Respecto a la alteración de las condiciones de existencia relacional o daño a la vida de relación, ... se calcularán, según lo determinó el ad-quem, en veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes (...)”

Con todo, no resulta aceptable que en el hecho que motivó la controversia y que resulta mucho menos gravoso para el demandante, se tase en una suma excesiva y desbordada.

Por último, en la demanda se solicita el pago de la suma total de **480 SMMLV**, por concepto de **daño al proyecto de vida**, discriminados así:

DAÑO AL PROYECTO DE VIDA		
DEMANDANTE	PARENTESCO CON LA VÍCTIMA DIRECTA	VALOR
MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL	Víctima directa	100 SMMLV
ANA SOFIA BASTOS ESPINOSA	Hija	80 SMMLV
IDALILE MARIA SANDOVAL MOSQUERA	Madre	80 SMMLV
CLAUDIA YARELLY BASTOS SANDOVAL	Hermana	50 SMMLV
DANNA CAMILA LOPEZ BASTOS	Hija	35 SMMLV
SANTIAGO ANDRES BASTOS SANDOVAL	Hermano	50 SMMLV
DIEGO FELIPE BASTOS SANDOVAL	Hermano	50 SMMLV
EDWARD SANDOVAL MOSQUERA	Primo	35 SMMLV

Pretensión frente a la que me opongo, en primer lugar, como quiera que **ese concepto NO corresponde una tipología de perjuicio autónomo que sea reconocida por la H. Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia.** Efectivamente, la afectación del proyecto de vida, se trata de un concepto indemnizable que se encuentra subsumido en el concepto de daño a la vida de relación, por lo que reconocer este perjuicio, que por demás no está acreditado, se constituiría en una doble indemnización injustificada, y consigo en un enriquecimiento sin causa probada.

La jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia ya ha dejado suficientemente claro que el daño a la vida de relación comprende también la alteración a las condiciones de existencia generada por la mutación del proyecto de vida. En ese sentido, la afectación al proyecto de vida no se trata de un concepto autónomo como aparentemente lo pretende hacer ver la parte demandante, sino que se encuentra dentro de la conceptualización del daño a la vida de relación, por lo que, un eventual e hipotético reconocimiento del concepto de daño a la vida de relación, implicaría el resarcimiento por la modificación al proyecto de vida que se aduce en esta pretensión.

Verbigracia, puede traerse a colación la sentencia del 16 de julio del 2013, de la Sala Civil-Familia del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la que señaló en su análisis que

dentro del reconocimiento del daño a la vida de relación se encuentran incluidas todas aquellas circunstancias que pueden mutar el proyecto de vida de una persona:

*“(...) La apreciación conjunta de las piezas procesales que componen el plenario, y a las que me he referido, no dejan espacio para albergar la más mínima duda que **el demandante si sufrió daño de la vida de relación (...) porque con el conjunto de pruebas ya referidas se infiere que el mismo existe y fue sufrido en particular por el demandante sufrió considerablemente siendo el mismo trascendente para su proyecto de vida** y para demostrar el grave error de la apreciación probatoria en que incurrió el ad quem, al haber omitido observar las pruebas que acreditaban el daño y su grado máximo de afectación en la esfera de los, comportamiento en relación con otros, esperanza de vida, forma de enfrentar y sentir el futuro por esta demandante, ante la tragedia vivida y ante la muerte de sus parientes próximos, más allá del daño moral que pueda habersele reconocido ya que dadas las circunstancias en que el hecho dañoso se dio, y las consecuencias di mismo para la vida de este demandante, no se requieren mayores ni más profundas consideraciones porque ante **circunstancias como estas, que de hecho altera todo su proyecto de vida y la limitarla para desarrollarse adecuadamente (...)**”¹⁹ Negrita por fuera del texto original.*

En todo caso, se insiste, no hay ningún elemento de prueba que milite en el plenario que nos lleve a afirmar o si quiera a inferir que a la activa de esta acción se le ocasionó un perjuicio de tal naturaleza, por lo que, por la completa ausencia de medios de convicción, el juzgador deberá tener lo manifestado en esta pretensión como no cierto por no estar debidamente acreditado.

Adicionalmente, la improcedencia del reconocimiento de este supuesto daño, cobra aún más fuerza en razón a que este se encuentra cubierto dentro del perjuicio de daño a la vida de relación, cuya indemnización también se solicita en el líbello de demanda. De este modo, se hace manifiesto que lo que parte demandante busca es que se le indemnice en dos ocasiones por un mismo daño, cuestión que resulta inviable por configurar un enriquecimiento sin justa causa y por desnaturalizar la finalidad de la indemnización.

Por ende, el Despacho debe desatender la solicitud que realiza la parte actora con relación al reseñado perjuicio.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “TERCERA”: en lo que atañe a la petición de condena en costas del proceso y agencias en derecho, reitero mi oposición, toda vez que, se repite, la demandada no tiene ninguna obligación indemnizatoria derivada de los hechos descritos en el escrito genitor, como quiera que, no es notoria la presencia de elementos que permitan estructurar la responsabilidad civil extracontractual en contra del sujeto pasivo de la acción que nos convoca.

En adición a lo anterior, es menester advertir, que no se encuentran en el caso de marras, fundamentos jurídicos ni fácticos para la prosperidad de las anteriores pretensiones, de manera que no puede aspirarse con éxito que se materialice una condena en contra del sujeto pasivo de esta litigio, ni mucho menos que se le exija el pago de costas procesales; por la orfandad probatoria de la responsabilidad civil que se pretende endilgar, no habría obligación de indemnizar, y mucho menos podría estar obligada dicha parte a pagar costas frente a un proceso en el que es probable que no salga vencida en juicio.

¹⁹ TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA, Sala Civil – familia, Sentencia del 16 de julio del 2013.

En ese orden de ideas, solicito respetuosamente al Despacho se sirva declarar como no probada esta pretensión y negar la misma. Adicionalmente, solicito que, en vista de que no se identifica ninguna actuación que refleje la necesidad de un reproche jurídico por parte de la accionada, se condene en costas a la demandante, pues sometió al extremo pasivo y a mi prohiada, sin justificación ni respaldo probatorio alguno, al agotamiento innecesario de estas instancias judiciales.

III. OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO Y A LA CUANTIFICACIÓN DE PERJUICIOS.

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 206 del Código General del Proceso²⁰ y con el fin mantener un equilibrio procesal, garantizar pedimentos razonables y salvaguardar el derecho de defensa de mi procurada, procedo a **OBJETAR** el Juramento Estimatorio de la Demanda, toda vez que, se evidencia la ausencia de pruebas que permitan inferir que se estructuró la responsabilidad civil extracontractual que predica la parte actora.

Es preciso señalar que, en materia de indemnización de perjuicios, opera el principio de que el daño y su cuantía deben estar plenamente probados para proceder a su reconocimiento, toda vez que al juzgador le está relegada la posibilidad de presumir como cierto un perjuicio y más aún la magnitud del mismo. En efecto, con miras a la obtención de una indemnización, no basta alegar el supuesto detrimento, por cuanto el mismo no es susceptible de presunción, sino que es obligatorio acreditar debidamente su cuantificación.

En este sentido lo ha indicado la H. Corte Suprema de Justicia, como se expone a continuación:

*“(…) No sobra indicar que **la valoración del juramento estimativo debe sujetarse a las reglas de apreciación del mismo**, en virtud de las cuales, **no basta con las afirmaciones del demandante, pues es menester de una parte, que las sumas se encuentren señaladas de manera razonada**, y de otra, que de conformidad con la sustancialidad de las formas debe mediar un principio de acreditación, siquiera precario, de cuanto se expresa en él (…). Luego, **si no se tiene prueba del daño**, pues el juramento estimatorio a lo sumo constituye —de ser razonable— prueba de su cuantía, **no se puede reconocer indemnización en los términos reclamados por el recurrente**, como ocurre en el presente asunto (…).”²¹* Negrita por fuera del texto original.

De acuerdo con el artículo 206 del Código General del Proceso, la parte demandante deberá indicar en el texto en el cual se hace el juramento estimatorio lo siguiente: **1.** Que se afirma bajo la gravedad del juramento; **2.** Que se trata de juramento estimatorio; **3.** El valor de cada uno de los conceptos, rubros o partidas que componen la indemnización, frutos, mejoras o compensación, en este tipo de escenarios, incluir los conceptos por perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante); **4.** El valor total y; **5. Las razones que se tuvo en cuenta para cada uno de los valores asignados, exponiéndolos con precisión, claridad y con fundamento en pruebas.**

²⁰ CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, Artículo 206: “(…) Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación (…).”

²¹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Penal, Sentencia SP1796-2018/51390 de mayo 23 de 2018. M.P. Dr. Luis Guillermo Salazar Otero.

En el caso que nos convoca, es vital indicar que se no se cumple con el quinto requisito puesto que, si bien la accionante expone las razones por las cuales presuntamente se le causó unos perjuicios materiales a título de daño emergente y lucro cesante consolidado y futuro, sus aseveraciones no fueron respaldadas con medios de prueba suficientes. En efecto, se presentó primer lugar, una solicitud indemnizatoria por la suma total de **\$12.121.299**, por concepto de **daño emergente**, la cual se discriminó así: **(i)** \$6.800.000 por la pérdida total de la motocicleta de placa MWC 51E; y **(ii)** \$5.321.299, por los gastos de transporte posteriores a la fecha de ocurrencia del accidente, que corresponden a los desplazamientos de la víctima y de sus familiares para atender diligencias relacionadas con el estado de salud.

En ese orden de cosas, se debe señalar que, para que proceda una indemnización por este concepto, no basta con manifestar que, con ocasión del supuesto perjuicio, que se endilga haber causado los demandados, se ha incurrido en una serie de gastos, sino que es deber de la parte actora probar de manera idónea e inequívoca, en primer lugar, que efectivamente se ha incurrido en esos gastos, aportando las facturas o documentos equivalentes con todos los requisitos exigidos por la Ley, y en segundo lugar, que dichos gastos guarden una relación directa con los hechos manifestados con la demanda, y en el caso de marras, tenemos que los documentos con los cuales se pretende soportar los supuestos gastos en que ha incurrido el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, no cumplen con los requisitos que establece el Estatuto Tributario y la DIAN, para que sean considerados facturas o documentos equivalentes.

Ahora bien, frente a cada uno de los conceptos y sumas reclamadas a título de daño emergente por la parte actora, es pertinente realizar los siguientes cuestionamientos:

- i) **Pérdida total de motocicleta.** Ahora bien, respecto al pago que se solicita a título de daño emergente, por la suma de **\$6.800.000**, por concepto de la pérdida total de la motocicleta de placa MWC 51E; es importante precisar que conceptualmente, el daño emergente está definido como aquellos valores que salen del patrimonio de una persona, como consecuencia de determinado hecho, que genera o representa un detrimento económico para sí. De allí que, las meras expectativas que no puedan cuantificarse, tal y como ocurre en este caso, donde se aporta un simple extracto de la guía de valores del Fasecolda, en la que se relaciona el valor de la referida motocicleta, no puedan catalogarse como un daño emergente, susceptible de reconocimiento económico, pues **nada comprueba que la motocicleta haya quedado inservible**, es decir que haya sido una pérdida total; de hecho, en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito se indicó que la motocicleta solo “(...) *presenta daños lateral derecho* (...)”.

En segundo lugar, bajo el hipotético supuesto de haberse producido la pérdida total, de todos modos, no se probó que ello representaría una pérdida en el patrimonio del demandante, puesto que no se aportó el certificado de tradición de la motocicleta, o la licencia de propiedad siquiera, que acredite que el vehículo era de su propiedad para la fecha de los hechos.

- ii) **Por el valor de los transportes.** En lo que atañe a los gastos de transporte, en cuantía de **\$5.321.299**. Como se expresó en líneas precedentes, para que sea reconocida una indemnización por daño emergente, es imperioso demostrar de manera fehaciente, que quien pretende tal indemnización en efecto sufrió un desmedro en su patrimonio. Tal demostración debe realizarse por medio de los documentos que legalmente acrediten la erogación, tal como una factura o un documento equivalente, **este último aparejado del RUT de quien lo expide**. La parte actora pretende que con la sola relación de unos valores que aportó con la demanda sea tenida en cuenta como soporte, siendo que con

ello no se está acreditando ningún perjuicio, ni tampoco constituye un documento idóneo para su demostración, lo cual hace imposible su reconocimiento.

También se relacionaron cuatro cuentas de cobro emitidas, presuntamente por el señor Juan Davis Chávez Contreras, en las que se consigna que la víctima directa le debe la suma total de \$4.380.000, por concepto de transporte en el vehículo de placa KLQ407, desde el día 24 de marzo del 2020 al 27 de julio del 2020; sin embargo, no se acompañó junto con dichas cuentas de cobro, la cédula de quien la emitió, el certificado de tradición o licencia del automotor en el cual se realizó el transporte, ni mucho menos, la relación de las supuestas citaciones médicas o la constancia de asistencia a las mismas.

Finalmente, señalo que, en tanto que todos estos documentos, con los que se pretende acreditar la causación del daño emergente, provienen de terceros, deberá comparecer ante su Despacho la persona que los emitió, con el propósito de que, conforme lo establece el artículo 262 del Código General del Proceso, se ratifique su contenido; puesto que esta norma faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria, conforme se procederá a solicitar al Juzgador.

Con todo, recuerdo que el daño emergente corresponde a la pérdida económica por la destrucción a puesta en peligro del bien jurídico y todos aquellos gastos, erogaciones o desembolsos que necesariamente debe hacer una persona para atender todo lo relacionado con la vulneración del mismo o las secuelas que este deja. En este caso, en la demanda se habla de unos gastos sin respaldos probatorios suficientes, de manera que hay ninguna comprobación de que los mismos se hayan casados, por lo que de entrada es una petición indemnizatoria cuyo reconocimiento trasciende imposible, haciéndose menester que el Juzgador despache desfavorablemente esta pretensión.

De otra parte, se solicitó a favor del señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** la suma **\$48.260.285,6** a título de **lucro cesante consolidado** y de **\$392.124.285,25**, por **lucro cesante futuro**. Montos a los que me opongo rotundamente a su reconocimiento, puesto que, por deficiencia probatoria, trasciende a todas luces imposible de atender.

Primero que nada, se observa que la liquidación efectuada por la parte demandante adolece de error grave al desconocer la técnica de liquidación fijada por la H. Corte Suprema de Justicia de Colombia, así como también fundamentarse en datos que no son veraces, razón por la cual debe desestimarse. En segundo lugar, se deberá tener en consideración que, pese a que la liquidación efectuada en la demanda, toma como base el salario que, presuntamente, el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** devengaba para la fecha de los hechos, justificada en la “certificación de nómina” expedida por el tesorero general de la Policía Nacional y que se llagó a la demanda, lo cierto es que, este documento por sí solo no acredita el ingreso del accionante. En efecto, la suma de \$3.880.678,34, indicada en dicha constancia, hace referencia al salario devengado al momento de su emisión, esto es, el 31 de agosto del 2021 y no refiere que ese rubro haya sido el percibido por la víctima al momento del accidente, el cual acaeció casi dos años atrás; en este orden de ideas, deberá acreditarse este particular debidamente por el extremo actor.

En tercer lugar, el reconocimiento de la suma solicitada, especialmente por concepto de lucro cesante futuro, es claramente improcedente, pues si partimos de la definición misma de lucro cesante descrita en el artículo 1614 del Código Civil como “(...) **la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido**

imperfectamente, o retardado su cumplimiento (...)” negrita por fuera del texto original; se tiene palmariamente que, en el caso que nos ocupa, no se es posible hablar de la materialización de este perjuicio, habida cuenta de que, además de que no existen elementos que acrediten la responsabilidad de la parte pasiva, adicionalmente, se tiene que se aportó una certificación laboral que desacredita la causación de este perjuicio.

Es importante aclarar y resaltar que, de acuerdo con lo que a lo largo de la demanda se manifiesta, como resultado del presunto accidente, el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** se ha visto imposibilitado para obtener recursos económicos necesarios para su subsistencia, no obstante, de acuerdo con la relación que se aportó con el libelo genitor, en concreto con la certificación laboral emitida por la Policía Nacional, el accionante se encuentra laborando en dicha institución, percibiendo un salario de \$3.880.678,34, el cual se ha visto reducido por obligaciones propias del demandante.

De manera que, no resulta válida la afirmación de que, como resultado de los hechos supuestamente acaecidos el 17 de noviembre del 2019, el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, hubiera dejado de percibir un ingreso económico que le permitiera su subsistencia, puesto que la misma prueba documental por él incorporada acreditaría que con posterioridad al evento reprochado, sí continuó recibiendo ingresos. Así entonces, desacreditada se encuentra la aseveración que el hecho demandando causó un lucro cesante consolidado o futuro al accionante, puesto que este mismo confesó con la incorporación de este documento, que no ha dejado de percibir ingresos.

No puede pasarse por alto que en lo que atañe al lucro cesante, la H. Corte Suprema de Justicia, ha trazado algunas pautas para su entendimiento, y al respecto dijo: “(...) *En efecto, en cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual* (...)”²² Negrita por fuera del texto original.

En otras palabras, el rubro lucro cesante no indemniza la pérdida basada en una mera expectativa o probabilidad de beneficios económicos, sino el daño que supone privar la obtención de dividendos a los cuales habría tenido derecho la víctima de no haber ocurrido el hecho, pero bajo el esquema de una privación de ganancia cierta. Por lo tanto, existe un razonable juicio de posibilidad, relativo a la concreción de un resultado útil donde se combinan la certidumbre y la fluctuación, pero partiéndose de la base de que el afectado se hallaba en una posición de privilegio que le permitiría obtener un beneficio, y el actuar ilícito de otra persona le impide fructificar tal situación de prosperidad. Entonces demostrado una vez demostrado el hecho y el daño, es preciso que se acredite que el demandante, de manera incuestionable, se encuentra privado de percibir un ingreso económico; situación que, conforme lo expuesto arriba se desacreditó en este caso.

De tal suerte, es evidente que, con la con la manifestación esbozada en esta pretensión indiscutiblemente el extremo actor desea lucrarse, pues un eventual reconocimiento a título de lucro cesante consolidado o futuro, resultaría en sumo grado injustificado, por la carencia de pruebas de la demanda aportada, lo cual cimienta esta oposición. Por lo que la liquidación resulta, además, exagerada y carente de soporte probatorio adicional que la demuestre, y en ese sentido, debe tenerse como mal realizada, y la petición indemnizatoria debe negarse.

Así las cosas, la tasación de los perjuicios analizados adolecen de un título válido, que acredite la existencia de obligación indemnizatoria, pues debe recordarse que en el derecho colombiano

²² CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia 055 de 24 de junio del 2008, Expediente 2000-01141-01.

no es admisible el reconocimiento de indemnización alguna por hechos que no constituyan un verdadero daño, es decir, que el detrimento o perjuicio debe ser cierto y no puede presumirse. En el caso que nos ocupa, no hay elementos de juicio o pruebas que puedan utilizarse para calcular los supuestos perjuicios reclamados, ni mucho menos que acrediten la eventual obligación de las partes demandadas en esta contienda, por lo tanto, deben ser todos negados.

Con todo, en el entendido de que las sumas consignadas en el acápite del juramento estimatorio no obedecen a la realidad probatoria allegada al proceso, de manera amable solicito a usted señor Juez, ordenar la regulación de la cuantía y dar aplicación a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 206 del Código General del Proceso.

IV. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA

- **INEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEPRECADA EN CONTRA DEL EXTREMO DEMANDADO.**

Se plantea esta excepción con el ánimo de explicar al Despacho que, el artículo 2341 del Código Civil, indica que “(...) *El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido (...)*”; norma de la cual se desprende necesariamente que es obligatorio que la parte demandante acredite la existencia de tres elementos:

a. Existencia de un hecho dañoso:

En primer lugar, el hecho se refiere a las circunstancias que modifican el mundo exterior y que, puede ser realizado por el propio responsable, un tercero bajo dependencia del responsable o por una cosa de propiedad del mismo. Frente a este concepto, el doctrinante Javier Tamayo Jaramillo, ha enseñado que se trata de un hecho ilícito, ya que una persona con su acción u omisión realiza conductas que están previamente prohibidas por el orden jurídico.

No obstante, puede ser un hecho revestido de culpa (hecho culposo), el cual se concibe como uno de los elementos más complejos y determinantes de la responsabilidad civil; este elemento es fundamento de las teorías subjetivas de la responsabilidad civil en las cuales se tiene consideración de la conducta del autor, evaluándose o examinándose la forma de proceder en cuanto a las circunstancias internas del responsable. La culpa se tiene entonces como el elemento subjetivo de una conducta o hecho dañoso que casi siempre está prohibida por la ley.

En el caso que nos asiste, el hecho dañoso lo constituye el accidente de tránsito acaecido el 17 de noviembre del 2019, frente al cual, se observa lo siguiente: (i). Para acreditar el evento solo se allegó el informe policial de accidentes de tránsito y las documentales relativas a la investigación penal, los cuales no son prueba idónea, pertinente ni contundente frente a al acaecimiento del evento; (ii). De tenerse estos elementos documentales como prueba, estos descararían la responsabilidad de la pasiva, como quiera que evidencian la presencia de un hecho fortuito; por lo que NO estaría demostrado que el evento sucedió bajo las circunstancias que indica la parte actora. De manera que, el acaecimiento del hecho dañoso no está fehacientemente acreditado.

En efecto, el informe policial de accidentes de tránsito que consignó los hechos del 17 de noviembre del 2019, no acreditan de manera fidedigna el origen, desarrollo y resultado del accidente como se indica en la demanda. en lo que atañe al fondo del asunto, si bien se observa que, pretendiendo demostrar los hechos demandados la actora allegó las documentales relativas

al informe policial de accidentes de tránsito y un informe de reconstrucción de accidentes, es preciso indicar que, en primer lugar, el IPAT es un documento diligenciado por una persona que no fue testigo presencial, por lo que no tiene conocimiento directo frente a lo ocurrido, en segundo lugar, lo que se registró en el informe policial de accidentes de tránsito, conforme fue aportado, no es suficientemente legible y no se puede apreciar con claridad su contenido, y en tercer lugar, este no concluye, mediante elementos de prueba recolectados y de manera definitiva y contundente, cuál fue la génesis del aludido accidente, de manera que con fundamento en aquel no es posible concluir sin lugar a duda razonable las conclusiones que eleva el extremo accionante frente a la presunta existencia de responsabilidad civil extracontractual. Por lo anterior, dicho elemento documental no puede ser tenido como prueba válida para acreditar lo que aquí se afirma, siendo necesario que la demandante aporte medios de prueba idóneos, conducentes y pertinentes para tener por cierto este hecho.

Es vital resaltar que, en lo que atañe al informe policial de accidentes de tránsito, jurisprudencialmente se ha establecido que no puede ser asimilado a un informe pericial, en tanto que no comporta la naturaleza demostrativa suficiente para tener como probado un hecho. Frente a este asunto ha dicho la H. Corte Constitucional que: “(...) *El marco normativo y el manual permiten establecer que el informe policial de accidente de tránsito **no es un informe pericial**, sino un informe descriptivo. Este informe, a su vez, tiene unos criterios de evaluación propios, **que no son los establecidos por el CPG o el CPACA para este tipo de prueba** (...)*”²³ Negrita por fuera del texto original.

De tal suerte, dicho documento no es prueba suficiente ni mucho menos determinante sobre la génesis, desarrollo y desenlace de los hechos reprochados; de manera que, no puede válidamente esperar el accionante que dicho informe sea suficiente para acreditar la responsabilidad civil extracontractual que en este punto se pretende en contra del señor SANTIAGO BEDOYA RAMIREZ, ni mucho menos de mi prihijada. Tal documento, en cuanto a su contenido material, deberá ser debatido dentro del curso procesal respectivo, y tendrá el valor probatorio que el funcionario judicial le asigne, después de analizar todos y cada uno de los posibles escenarios en los que haya ocurrido el evento, con el fin de descubrir mediante las pruebas idóneas, pertinentes y conducentes, la causa eficiente que lo originó.

De otro lado, en lo que respecta al informe de reconstrucción de accidentes, desde ya debe indicarse que este no tiene la virtualidad de ser un dictamen pericial por no cumplir con los requisitos señalados en los Artículos 226 y 227 del C.G.P., que la ley establece para valorar el concepto pericial emitido por las instituciones o profesionales especializados; claramente, este fue relacionado en la demanda por el apoderado de la parte actora, como informes de carácter técnico, utilizados para soportar los supuesta responsabilidad en cabeza del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, por lo que el Despacho deberá separarse del INFORME de “Reconstrucción en 3D de accidente de tránsito” aportado por la parte actora, restándole totalmente valor probatorio, al no cumplir éste con los requisitos de carácter obligatorio que establece la normatividad procesal vigente.

Así las cosas, no constituyendo tal documento un dictamen pericial, es simplemente un informe emanado por un tercero, y de tal suerte, será necesario que la persona que lo emitió comparezca ante el Juzgador para efectos de ratificar su contenido, conforme lo dispuesto en el artículo 262 del Código General del Proceso, el cual faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria; si ello no ocurre, no se podrá conceder el valor probatorio pretendido a este

²³ CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-475 del 2018, M. P.: Dr. Alberto Rojas Ríos.

documento y deberán tenerse como no demostrados todos los hechos planteados en la demanda que se justifiquen mediante el mismo.

Por lo anterior, será indispensable que el Juzgador tenga en consideración todos los elementos de convicción que convergen en este proceso antes de arrojar sus conclusiones sobre la génesis, desarrollo y desenlace de los hechos presuntamente acontecidos el 17 de noviembre del 2019; puesto que no es posible con la recolección de meros indicios, informes e imágenes no concluyentes atribuir a la pasiva de esta acción una responsabilidad que no se encuentra fehacientemente demostrada.

En ese orden de ideas, hasta tanto ello no ocurra, no se podrá endilgar ninguna responsabilidad civil extracontractual en relación con el conductor del vehículo de placa **DLP-452** o de la Compañía de seguros con la que tiene la respectiva póliza de responsabilidad. No obstante, de llegarse a tener como válidos estos documentos, como se explicará en el literal c de esta excepción, lo que se evidencia es que el evento sucedió de manera distinta a la indicada por el extremo accionante.

b. Existencia de un daño – cuya acreditación corresponde al actor:

Por su parte, en lo que al daño se refiere, es elemental indicar lo siguiente:

“(...) En el ámbito normativo, la noción de daño comprende toda lesión a un interés tutelado, ya presente, ora posterior a la conducta generatriz, y en lo tocante al daño patrimonial, la indemnización cubre las compensaciones económicas por pérdida, destrucción o deterioro del patrimonio, las erogaciones, desembolsos o gastos ya realizados o por efectuar para su completa recuperación e íntegro restablecimiento, y el advenimiento del pasivo (damnumemergens), así como las relativas a la privación de las utilidades, beneficios, provechos o aumentos patrimoniales frustrados que se perciben o percibirían de no ocurrir los hechos dañosos (lucrumcessans), esto es, abarca todo el daño cierto, actual o futuro(...)”²⁴

En atención de lo manifestado por la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 18 de diciembre de 2008, consideró al daño como un elemento estructural de la responsabilidad civil, que corresponde de manera indelegable probar a quien manifiesta su causación, la H. Corte explicó lo siguiente:

“(...)su plena demostración recae en quien demanda, salvo las excepciones legal o convencionalmente establecidas, lo que traduce que, por regla general, el actor en asuntos de tal linaje, está obligado a acreditarlo, cualquiera sea su modalidad, de donde, en el supuesto señalado, era -y es- imperioso probar que el establecimiento producía utilidades, o estaba diseñado para producirlas en un determinado lapso de tiempo, sin que este último caso, pueda confundirse con el daño meramente eventual o hipotético, que desde ningún punto de vista es admisible (...)”²⁵

Teniendo en cuenta lo expresado por la H. Corte en dicha sentencia, si no hay daño no puede hablarse de responsabilidad civil extracontractual, además se reitera, cuando se demanda por responsabilidad civil, se debe demostrar el daño que fue presuntamente causado, identificando

²⁴ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia 9 de septiembre de 2010. Exp. 2005-00103-01. M.P.: Dr. Namén Vargas William.

²⁵ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia del 18 de diciembre del 2018, expediente 88001-3103-002-2005-00031-01. M.P.: Dr. Arturo Solarte Rodríguez.

claramente para los efectos, cómo es la accionada generó o produjo dicho daño; en ese tenor, se hace mandatorio que incorporen los medios de prueba legalmente permitidos, para demostrarle al censor la certeza que compone de su dicho y, por supuesto, la veracidad del daño irrogado.

En este asunto, el daño lo constituye, según la demanda, las lesiones y secuelas que el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** habría padecido, como resultado del accidente de tránsito. Frente a este tópico, si bien se allegó la Historia Clínica de la demandante y el dictamen de pérdida de capacidad laboral, lo cierto es que con base en estos elementos se advierte que el presunto daño no fue de la magnitud de la que asevera la demandante. Pues el porcentaje de pérdida que le fue emitido, fue lo suficientemente bajo como para entender que aquel no está en una condición de invalidez o en la imposibilidad de desarrollar actividades físicas, sociales o laborales de manera normal. Además, la información proporcionada por el mismo accionante, esto es mediante la certificación laboral que reposa en el plenario, este se encuentra actualmente está laborando, por cuanto se encuentra percibiendo ingresos mensuales. Por lo que la lesión y secuelas indicadas en el libelo demandatorio no están acreditados.

c. Existencia de un nexo causal entre el hecho y el daño:

En orden de lo anterior, para obtener la declaratoria de responsabilidad civil, deben acreditarse los elementos esenciales anteriores, esto es, el hecho y el daño; no obstante, aunado a ello, es precisa la acreditación del vínculo entre el hecho dañoso, culpable o delictual, y el daño presuntamente padecido por la víctima; vínculo que, valga aclarar, debe reunir determinadas condiciones, en tanto que no es suficiente con una hipotética ligazón abstracta.

El examen anterior permite concluir que, la ausencia de acreditación de la existencia del vínculo requerido para atribuir responsabilidad civil extracontractual, genera, como es a todas luces esperable, la absolución de la parte demandada; toda vez que si los accionantes no logran elucidar de manera clara y precisa cómo es que el actuar de la demandada, fue la causa determinante y eficiente para la producción del perjuicio por el que quiere ser indemnizada, no habría justificación jurídicamente razonable ni viable para la prosperidad de su pretensión.

La H. Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre los elementos para configurar este tipo de responsabilidad, en los siguientes términos:

*“(…) El fundamento de la exigencia del nexo causal entre la conducta y el daño no solo lo da el sentido común, que requiere que la atribución de consecuencias legales se predique de quien ha sido el autor del daño, sino que el artículo 1616 del Código Civil, cuando en punto de los perjuicios previsibles e imprevisibles al tiempo del acto o contrato, señala que si no se puede imputar dolo al deudor, éste responde de los primeros cuando son consecuencia inmediata y directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. Por lo demás, es el sentido del artículo 2341 del Código Civil el que da la pauta, junto al anterior precepto, para predicar la necesidad del nexo causal en la responsabilidad civil, cuando en la comisión de un delito o culpa -es decir, de acto doloso o culposo- hace responsable a su autor, en la medida en que ha inferido daño a otro (...)*²⁶*

Es claro el precedente jurisprudencial al determinar que efectivamente, es imprescindible la presencia de un vínculo entre el hecho y el daño, el cual refleje a todas luces necesaria, la

²⁶ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia 6878 de septiembre 26 de 2002. M.P.: Dr. Jorge Santos Ballesteros.

atribución de responsabilidad civil extracontractual; si no es claro cómo es que la accionada fue la causante del daño irrogado, trasciende improcedente, por carencia de demostración, que eventualmente se la condene como civilmente responsable.

En este asunto se deberá demostrar entonces, la relación causal entre la conducta de la pasiva de esta acción y el daño alegado por la parte accionante. El cual no está probado, contrario a ello, el nexo de causalidad se ha desfigurado, luego que, el evento que aquí se reprocha acaeció como resultado de un hecho externo y completamente ajeno a la voluntad del conductor del vehículo de placa **DLP-452**, como quiera que, el evento se produjo fue en razón a las condiciones climáticas del día de los hechos.

Como ya se anticipó, en el evento de que el Juzgador decidiera otorgar el valor probatorio pretendido por el extremo accionante al informe policial de accidentes de tránsito, lo que este revela, es que el evento que aquí se reprocha, habrían tenido lugar, como resultado de un hecho externo a la voluntad del señor SANTIAGO BEDOYA RAMIREZ, que de ninguna manera le es atribuible. Se explica que, de acuerdo a lo que se alcanza a advertir en las observaciones del informe policial de accidentes de tránsito allegado, se registró que las condiciones climáticas eran complejas, generándose aparentemente el accidente.

En el Informe Policial de Accidente de Tránsito que obra en el expediente se consignó la hipótesis No. 138 la cual hace referencia al acaecimiento de un accidente producido por la presencia de niebla, lluvia o humo. Así mismo, se observa como causa probable (hipótesis) del accidente los conductores de los vehículos No.1 AUTOMÓVIL y No.2 MOTOCICLETA el código 304 "SUPERFICIE HÚMEDA; cuando la vía o parte de ella se encuentra mojada", y, aunque la determinación de las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio, es preciso advertir que la manifestación de la parte demandante no tiene ningún fundamento, ya que el mismo acaeció presuntamente como consecuencia de un hecho externo, imprevisible e irresistible como lo es un factor climático, que tuvo injerencia en el resultado final.

En este orden de ideas, se observa que el accidente de tránsito al que se refiere la demandante, se habría producido como resultado del acaecimiento de un evento externo, imprevisible e irresistible a la conducta del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, el cual configura consigo un caso fortuito, que enervaría cualquier responsabilidad que se pretenda en contra de la pasiva de esta acción.

Por lo expuesto, es claro que el evento no se presentó por negligencia o impericia del demandado, sino que aparentemente se habría producido como resultado del acaecimiento de un evento externo, imprevisible e irresistible a la conducta de aquel, que, por lo tanto, no le puede resultar atribuible, y por contera, tampoco a las demás que conforman el extremo pasivo, como quiera que, se reitera, éste implicaría la configuración de un eximente de responsabilidad concretado en un hecho fortuito.

De acuerdo con el precedente jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia, cuando la fuerza mayor o el caso fortuito provienen de eventos de la naturaleza, como habría sucedido en este caso, se encuentra probado el eximente de responsabilidad, cuando el conductor del vehículo ha cumplido con las medidas de cuidado, en procura de evitar el daño, y si a pesar de ello el accidente acontece. De suerte que el hecho se torna irresistible e inevitable, ya que, en palabras de la H. Corte "(...) *lo imprevisible no es lo que [no] haya pasado previamente por la*

*mente del demandado, sino aquello que sucede pese a haberse tomado todas las medidas tendientes a evitar el daño (...)*²⁷.

Así, el hecho relativo a las condiciones climáticas, como es apenas evidente, resulta una situación que se encuentra por fuera del control y previsibilidad del demandando, y lo que se observa es que el conductor del vehículo que me mi mandante aseguró, fue precavido en la conducción del automotor el día de los hechos; en ese orden de ideas, ya que, de acuerdo a lo que la H. Corte Suprema de Justicia ha advertido sobre este particular, cuando el conductor ha cumplido con las medidas de cuidado, en procura de evitar el daño, y si a pesar de ello el accidente acontece, se exonera de responsabilidad, diáfano resulta concluir que, frente a la pasiva de esta acción no existe obligación alguna que pueda exigirse en su contra.

Se recuerda que, la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia ha dejado claro que, la responsabilidad de quien causa el daño se presume, salvo si este acredita la concurrencia de situaciones que lo eximen de la misma, tales como: la culpa exclusiva de la víctima, la fuerza mayor o caso fortuito, o la intervención de un elemento extraño. En sentencia del 25 de octubre de 1999 expediente 5012, la H. Corte, se refirió al tema de la siguiente manera:

*“(...) a la víctima le basta demostrar los hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligrosa y el perjuicio sufrido y será el demandado quien deba comprobar que el accidente ocurrió por la imprudencia exclusiva de la víctima, por la intervención de un elemento extraño, o por la fuerza mayor o caso fortuito ya que el ejercicio de una actividad peligros, por su naturaleza, se lleva envuelto el de culpa en caso de accidente (...)*²⁸

Así entonces, habiendo ocurrido un acontecimiento externo al círculo de la actuación del agente (en este caso el conductor del vehículo que mi mandante aseguró), que reúne las características de imprevisibilidad y de inevitabilidad, siendo para aquel imposible materializar un resultado distinto, ciertamente, se encuentra que la supuesta responsabilidad que se pretende endilgar al señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, y por consiguiente a los demás demandados, no es más que una manifestación subjetiva de la parte actora, que no se ha demostrado, puesto que el caso fortuito o hecho de la naturaleza, probado con lo plasmado en el informe policial, rompe el nexo causal entre el hecho y el supuesto daño. De suerte que contrario a la tesis que mantiene la parte actora, de ninguna manera se encuentra estructurada la responsabilidad alegada, pues la misma se desdibuja por configurarse el eximente del caso fortuito.

Se resalta que, frente a la presunta violación de las normas de tránsito por invasión de carril, que adujo la parte actora en los hechos de la demanda, se trata solamente de una mera especulación, que no está respaldada bajo elemento documental técnico que lo acredite. Como es apenas evidente, es esencial que, para demostrar este escenario, se alleguen al plenario los medios de prueba técnicos y científicos idóneos, que con certeza afirmen que el vehículo de placa **DLP-452** se desplazaba en violación a las normas de tránsito; y en ese sentido, en tanto que hasta esta etapa procesal no se ha allegado dicha prueba, no se podrá tener por cierto que el evento lesivo se presentó por la conducción de aquel.

Revisado el expediente, para el suscrito no se han allegado pruebas suficientes para acreditar que el evento que se censura ocurrió como resultado de la negligencia o impericia al conducir por parte del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, es decir, por un hecho u omisión a ellas atribuible, por lo que las pretensiones indemnizatorias no están encaminadas a prosperar;

²⁷ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia SC17723-2016. Radicación n° 05001-3103-011-2006-00123-02. M.P. Dr. Luis Alonso Rico Puerta.

²⁸ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia del 25 de octubre de 1999, expediente 5012.

máxime cuando, los accionantes no han arrojado al expediente, medios que otorguen credibilidad sobre la forma en la que estos manifiestan que el hecho se suscitó.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente al Despacho se sirva declarar probada esta excepción.

- **INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO DE PLACA DLP-452 Y, CONSECUENTEMENTE, DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA EN CABEZA DE ALLIANZ SEGUROS S.A. POR LA CONFIGURACIÓN DE UN EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD CONCRETADO EN EL CASO FORTUITO.**

Esta excepción se propone porque, en efecto, se ha acreditado en este asunto que, el accidente de tránsito acaecido el pasado 17 de noviembre del 2019, obedeció a una causa extraña, esto es, por la presencia de un caso fortuito. Ciertamente, la responsabilidad por riesgo del conductor del vehículo construye tres causas que exoneran de responsabilidad: el hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima, la fuerza mayor y el caso fortuito; de los cuales, una vez materializados, denotan la inexistencia de nexo causal entre el hecho y el daño que aduce haber padecido la víctima. La jurisprudencia ha sido enfática en señalar que:

“(...) La Corte Suprema de Justicia ha precisado que, a la víctima de una lesión causada con ocasión de la conducción de vehículos, le basta con acreditar el ejercicio de dicha actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad entre aquella y este. En contraste, el presunto responsable no puede exonerarse probando la diligencia o cuidado, o la ausencia de culpa, y salvo que exista una norma que indique lo contrario, solo podrá hacerlo demostrando plenamente que el daño no se produjo dentro del ejercicio de la actividad, sino que obedeció a un elemento extraño exclusivo, esto es, la fuerza mayor, el caso fortuito, la intervención de la víctima o de un tercero, que excluyó la autoría por romper el nexo causal (...)”²⁹

Es importante señalar que el caso fortuito es el acontecimiento externo al círculo de la actuación del agente, en este caso del señor SANTIAGO BEDOYA RAMIREZ, conductor del vehículo de placa **DLP-452**, que reúne la connotación de imprevisible e inevitable, por lo cual, en este tipo de eventos, el hombre no puede hacer nada para evitarlos. En consecuencia, para eximir de responsabilidad al presunto causante de un accidente de tránsito, es necesario que el accidente haya sido inevitable e imprevisible para la persona que lo produce.

En el Informe Policial de Accidente de Tránsito que obra en el expediente se consignó la hipótesis No. 138 la cual hace referencia al acaecimiento de un accidente producido por la presencia de niebla, lluvia o humo. Así mismo, se observa como causa probable (hipótesis) del accidente los conductores de los vehículos No.1 AUTOMÓVIL y No.2 MOTOCICLETA el código 304 “SUPERFICIE HÚMEDA; cuando la vía o parte de ella se encuentra mojada”, y, aunque la determinación de las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio, es preciso advertir que la manifestación de la parte demandante no tiene ningún fundamento, ya que el mismo acaeció presuntamente como consecuencia de un hecho externo, imprevisible e irresistible como lo es un factor climático, que tuvo injerencia en el resultado final:

²⁹ CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-609-14. M.P. Dr.: Jorge Iván Palacio Palacio.

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO									
DEL CONDUCTOR		1 1 3 8				DEL VEHICULO DE LA VIA		1 3 0 4	
		2				2		3 0 4	
OTRA				ESPECIFICAR ¿ CUAL?				DEL PEATON DEL PASAJERO	

En este orden de ideas, se observa que el accidente de tránsito al que se refiere la demandante, se habría producido como resultado del acaecimiento de un evento externo, imprevisible e irresistible a la conducta del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, el cual configura consigo un caso fortuito, que enervaría cualquier responsabilidad que se pretenda en contra de la pasiva de esta acción.

Por lo expuesto, es claro que el evento no se presentó por negligencia o impericia del demandado, sino que aparentemente se habría producido como resultado del acaecimiento de un evento externo, imprevisible e irresistible a la conducta de aquel, que, por lo tanto, no le puede resultar atribuible, y por contera, tampoco a las demás que conforman el extremo pasivo, como quiera que, se reitera, éste implicaría la configuración de un eximente de responsabilidad concretado en un hecho fortuito.

De acuerdo con el precedente jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia, cuando la fuerza mayor o el caso fortuito provienen de eventos de la naturaleza, como habría sucedido en este caso, se encuentra probado el eximente de responsabilidad, cuando el conductor del vehículo ha cumplido con las medidas de cuidado, en procura de evitar el daño, y si a pesar de ello el accidente acontece. De suerte que el hecho se torna irresistible e inevitable, ya que, en palabras de la H. Corte “(...) *lo imprevisible no es lo que [no] haya pasado previamente por la mente del demandado, sino aquello que sucede pese a haberse tomado todas las medidas tendientes a evitar el daño (...)*”³⁰.

Así, el hecho relativo a las condiciones climáticas, como es apenas evidente, resulta una situación que se encuentra por fuera del control y previsibilidad del demandando, y lo que se observa es que el conductor del vehículo que me mi mandante aseguró, fue precavido en la conducción del automotor el día de los hechos; en ese orden de ideas, ya que, de acuerdo a lo que la H. Corte Suprema de Justicia ha advertido sobre este particular, cuando el conductor ha cumplido con las medidas de cuidado, en procura de evitar el daño, y si a pesar de ello el accidente acontece, se exonera de responsabilidad, diáfano resulta concluir que, frente a la pasiva de esta acción no existe obligación alguna que pueda exigirse en su contra.

Se recuerda que, la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia ha dejado claro que, la responsabilidad de quien causa el daño se presume, salvo si este acredita la concurrencia de situaciones que lo eximen de la misma, tales como: la culpa exclusiva de la víctima, la fuerza mayor o caso fortuito, o la intervención de un elemento extraño. En sentencia del 25 de octubre de 1999 expediente 5012, la H. Corte, se refirió al tema de la siguiente manera:

“(...) a la víctima le basta demostrar los hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligrosa y el perjuicio sufrido y será el demandado quien deba comprobar que el accidente ocurrió por la imprudencia exclusiva de la víctima, por la intervención de un elemento extraño, o por la fuerza mayor o caso fortuito ya que el ejercicio de una actividad peligros, por su naturaleza, se lleva envuelto el de culpa en caso de accidente (...)”³¹

³⁰ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia SC17723-2016. Radicación n° 05001-3103-011-2006-00123-02. M.P. Dr. Luis Alonso Rico Puerta.

³¹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia del 25 de octubre de 1999, expediente 5012.

Así entonces, habiendo ocurrido un acontecimiento externo al círculo de la actuación del agente (en este caso el conductor del vehículo que mi mandante aseguró), que reúne las características de imprevisibilidad y de inevitabilidad, siendo para aquel imposible materializar un resultado distinto, ciertamente, se encuentra que la supuesta responsabilidad que se pretende endilgar al señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, y por consiguiente a los demás demandados, no es más que una manifestación subjetiva de la parte actora, que no se ha demostrado, puesto que el caso fortuito o hecho de la naturaleza, probado con lo plasmado en el informe policial, rompe el nexo causal entre el hecho y el supuesto daño. De suerte que contrario a la tesis que mantiene la parte actora, de ninguna manera se encuentra estructurada la responsabilidad alegada, pues la misma se desdibuja por configurarse el eximente del caso fortuito.

Se resalta que, frente a la presunta violación de las normas de tránsito por invasión de carril, que adujo la parte actora en los hechos de la demanda, se trata solamente de una mera especulación, que no está respaldada bajo elemento documental técnico que lo acredite. Como es apenas evidente, es esencial que, para demostrar este escenario, se alleguen al plenario los medios de prueba técnicos y científicos idóneos, que con certeza afirmen que el vehículo de placa **DLP-452** se desplazaba en violación a las normas de tránsito; y en ese sentido, en tanto que hasta esta etapa procesal no se ha allegado dicha prueba, no se podrá tener por cierto que el evento lesivo se presentó por la conducción de aquel.

Revisado el expediente, para el suscrito no se han allegado pruebas suficientes para acreditar que el evento que se censura ocurrió como resultado de la negligencia o impericia al conducir por parte del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, es decir, por un hecho u omisión a ellas atribuible, por lo que las pretensiones indemnizatorias no están encaminadas a prosperar; máxime cuando, los accionantes no han arrojado al expediente, medios que otorguen credibilidad sobre la forma en la que estos manifiestan que el hecho se suscitó.

Con todo, solicito respetuosamente al Despacho declarar probada esta excepción.

- **INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS EN SUS CALIDADES DE CONDUCTOR Y COMPAÑÍA ASEGURADORA.**

En el presente acápite se presentarán los fundamentos de hecho y de derecho que en general, sustentan la oposición general a las pretensiones de la demanda y, en particular acreditan que los demandantes no han probado, como es su deber, no solo la existencia de todos los supuestos normativos de la presunta responsabilidad civil extracontractual que pretende endilgar a los demandados, entre ellos, a mi procurada **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, sino también probar los daños y perjuicios que pretende le sean indemnizados, y para ello, en primer lugar, habrá de analizarse brevemente el régimen de responsabilidad civil derivada del ejercicio de actividades peligrosas; en segundo lugar, y teniendo en cuenta el análisis anunciado, se resaltará cuál es la carga probatoria que tienen los demandantes en este tipo de procesos; para en tercer lugar, concluir que el demandante no ha cumplido con dichas cargas y, por ende, debe despacharse desfavorablemente las pretensiones del demandante.

- **Sobre el régimen de responsabilidad civil derivada del ejercicio de actividades peligrosas:**

En primer lugar, como se mencionó anteriormente, el artículo 2341 del Código Civil establece que *“(...) El que ha cometido un delito o culpa, que ha ingerido daño a otro, es obligado a la indemnización (...)”*. Con ocasión a esta disposición, la jurisprudencia ha resaltado los requisitos para la existencia de una responsabilidad civil extracontractual, ellas son: la culpa, el daño y el

nexo de causalidad del primero frente al segundo³². Con lo cual, quien pretenda reclamar la indemnización derivada de la responsabilidad civil extracontractual, en virtud del artículo 167 del C.G.P., tendrá la carga de probar la ocurrencia de los diferentes requisitos mencionados anteriormente.

En segundo lugar, el artículo 2356 ibídem establece la responsabilidad por actividades peligrosas en los siguientes términos: “(...) *Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparada por ésta (...)*”. Este enunciado normativo, no varía los elementos necesarios para la configuración de la responsabilidad civil extracontractual³³.

Teniendo en consideración lo anterior, es necesario precisar que el presunto menoscabo patrimonial que alegan los demandantes, se produjo con ocasión a la actividad peligrosa que en este caso ejecutó no solo el señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ, persona autorizada para conducir el vehículo asegurado de placa **DLP-452**, sino también el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, quien conducía la motocicleta de placa MWC 51E, es decir, la conducción de automotores.

En ese orden de ideas, es necesario traer a colación que por este hecho, la presunción de la culpa a favor del damnificado no desaparece³⁴, sin embargo, surge la imperiosa necesidad de determinar si hay lugar a su aplicación, teniendo en consideración la peligrosidad de ambas conductas y la incidencia de cada una de ellas en el percance³⁵.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso mencionar que obran en el expediente suficientes medios de prueba que acreditan que, tanto el vehículo de los demandados, como el del demandante, se encontraban en la ejecución actividades de la misma peligrosidad, esto es, la conducción de vehículos, por lo que para el caso concreto, no es procedente aplicar la presunción antes referida por no poderse predicar una situación de víctima y víctimario sobre los cuales dirigir dicha presunción y como consecuencia, es deber de los demandantes acreditar todos los elementos que constituyen la responsabilidad civil del demandado.

- **La carga probatoria de quienes demandan una indemnización por los eventuales perjuicios sufridos en desarrollo de una actividad peligrosa.**

Quien pretende aducir que la conducta de una persona compromete su responsabilidad en ejercicio de actividades peligrosas, tiene el deber de acreditar la existencia de todos los elementos que dan lugar a la Responsabilidad Civil en desarrollo de actividades peligrosas, tal y como lo ordena el artículo 167 del C.G.P. En otras palabras, quien pretende obtener la indemnización de perjuicios derivados del ejercicio de actividades peligrosas debe acreditar los elementos que la componen³⁶.

³² CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil; Magistrado Ponente: Dr. NICOLÁS BECHARA SIMANCAS, Sentencia: agosto 14 de 1995; Referencia: Expediente 4040.

³³ La culpa, el daño y el nexo de causalidad.

³⁴ Cfr; CORTE SUPREMA DE CASACIÓN, SALA CIVIL Y AGRARIA; Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Rúgeles, Sentencia: 5 de mayo de 1999; Referencia: Expediente 4978. Al respecto, la H. Corte Suprema de Justicia estableció: “(...) Cuando un daño se produce por la concurrencia de sendas actividades peligrosas (la de la víctima y la del agente), en lugar de colegir maquinamente la aniquilación de la presunción de culpa que favorece al damnificado, el juez deberá establecer si realmente a ella hay lugar en ese caso concreto (...)”

³⁵ Ibídem. Al respecto la H. Corte Suprema de Justicia estableció: “(...) juicio [aquel encaminado a determinar si se debe aniquilar la presunción de culpa que favorece al damnificado] para cuya elaboración deberá tomar en consideración la peligrosidad de ambas, la incidencia de cada una en el percance o la virtualidad dañina de la una frente a la otra (...)”

³⁶ Tal y como ya se ha mencionado estos elementos son: La actividad peligros desarrollada, el daño y el nexo de causalidad entre el primero y el segundo.

En este sentido, la H. Corte Suprema de Justicia en su labor de unificación jurisprudencial estableció que, en materia probatoria, quien pretende reclamar dicha indemnización debe acreditar el daño y el vínculo de causalidad. Así lo explica: “(...) *No se requiere la prueba de la culpa para que surja la obligación de resarcir, no porque la culpa se presuma sino porque no es esencial para fundar la responsabilidad, y por ello basta la demostración del daño y el vínculo de causalidad* (...)”³⁷.

Por su parte, tratándose del vínculo de causalidad, el actor debe cumplir con la carga probatoria que le asiste al demostrar que la actividad peligrosa es una condición necesaria del supuesto daño que se reclama. A dicha exigencia, la doctrina la ha denominado como la equivalencia de condiciones. En resumen, el vínculo de causalidad exige que entre la actividad peligrosa desarrollada y presunto daño exista una relación necesaria y directa³⁸ que debe ser acreditada durante el proceso, carga que no ha cumplido la parte demandante, pues como se ha venido insistiendo, el Informe Policial de Accidente de Tránsito no imputa la responsabilidad al vehículo asegurado, por lo que no es concluyente para establecer la responsabilidad.

Así mismo, el dictamen de reconstrucción de accidente aportado como prueba documental, no constituye una prueba sólida para imputar responsabilidad, pues la misma debe generarse en torno a la práctica de diferentes pruebas durante el proceso, que permitan determinar con certeza la causa real del hecho de tránsito.

• CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES PELIGROSAS.

Sin perjuicio de lo anterior, y sin que implique aceptación de responsabilidad en cabeza de los demandados o de mi representada, debe señalarse, tal como lo indica el profesor Tamayo Jaramillo en su libro Tratado de la responsabilidad Civil, Tomo I, que cuando concurren dos actividades peligrosas, en este caso tres, el principio de la responsabilidad civil por este tipo de actividades se rompe, para darle paso a una responsabilidad de basada en el principio de la culpa probada y a la posibilidad de una reducción de la indemnización habida cuenta de esta concurrencia. El profesor Tamayo señala lo siguiente:

“(...) El principio general según el cual el guardián de la actividad peligrosa tiene que probar una causa extraña para poderse liberar de responsabilidad, se quiebra cuando en virtud de la colisión de dos actividades peligrosas ambos guardianes sufren daños. (...). Algunos autores sostienen que, bajo tales circunstancias, el principio de la responsabilidad por actividades peligrosas desaparece para darle campo a la responsabilidad por culpa probada del artículo 2341 del Código Civil. Otros afirman que, aun en ese caso, las presunciones de responsabilidad continúan aplicándose en favor de cada una de las víctimas, finalmente, otros consideramos que en tales eventos cabe una reducción del monto indemnizable (...)”

Siendo así, la doctrina y la jurisprudencia, han sostenido que, frente a una eventual concurrencia de culpas en el ejercicio de actividades peligrosas, el sentenciador tendrá que examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produce el daño, a fin de valorar la equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes y su incidencia en la cadena de causas

³⁷ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia de 24 de agosto de 2009, M.P. Dr. Namen Vargas, William. Pág. 59.

³⁸ BARROS BOURIE, Enrique (2009); “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”; Segunda Edición, Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile. “(...) Tradicionalmente, se ha sostenido por la doctrina y jurisprudencia que la causalidad exige que entre el hecho y el daño exista una relación necesaria y directa (...)” Pág. 374

generadoras del daño, con el fin de establecer, a partir de la magnitud de esa injerencia, el grado de responsabilidad que corresponde a cada uno de los actores, en la forma prevista en el artículo 2357 del Código Civil.

En punto de la concurrencia de actividades peligrosas, en sentencia del 24 de agosto de 2009 la H. Corte Suprema de Justicia reiteró lo siguiente:

“(…) en la responsabilidad civil por actividades peligrosas concurrentes, es preciso advertir, la imperiosa necesidad de examinar la objetiva incidencia del comportamiento para establecer su influjo definitivo o excluyente, unitario o coligado, en el daño, o sea, la incidencia causal de las conductas y actividades recíprocas en consideración a los riesgos y peligros de cada una, determinando en la secuencia causativa, cuál es la relevante en cuanto determinante del daño y cuál no lo es y, de serlo ambas, precisar su contribución o participación (…)”

De lo expuesto en precedencia, resulta palmario indicar que, así como el vehículo asegurado por mi procurada **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, igualmente, el velocípedo conducido por el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** estuvo involucrado en el ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la conducción o tránsito en automóvil, máxime, si se tiene en consideración que en el Informe Policial de Accidente de Tránsito que obra en el expediente se consignó la hipótesis 138 la cual hace referencia la ocurrencia de un accidente por la presencia de niebla, lluvia o humo.

Así mismo, se observa como causa probable (hipótesis) del accidente los conductores de los vehículos No.1 AUTOMÓVIL y No.2 MOTOCICLETA el código 304 “SUPERFICIE HÚMEDA; Cuando la vía o parte de ella se encuentra mojada”, siendo necesario un análisis juicioso para determinar el grado de culpa, la participación de cada uno en la ocurrencia del accidente y su consecuente responsabilidad civil, para así concluir que hay una concurrencia de culpas lo que conlleva a un enfoque distinto desde el punto de la responsabilidad, y específicamente del elemento de la culpa, y ello da lugar a una reducción del monto indemnizable, si es que hay lugar a ello.

Por lo anterior, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción

- **AUSENCIA DE ELEMENTOS DE PRUEBA QUE ACREDITEN LA CAUSACIÓN DE LOS PERJUICIOS ALEGADOS POR LA PARTE DEMANDANTE.**

Sin perjuicio de las manifestaciones anteriores, considero oportuno manifestar al Despacho que, de acuerdo al artículo 164 del Código General del Proceso, las decisiones judiciales deben, imperiosamente, tener respaldo en las pruebas que, con observancia de las normas y principios procesales, fueron arrimadas al proceso. De este modo, el principio de la necesidad de la prueba, previsto en el artículo en comento, constituye una garantía a la actuación probatoria que adelantan las partes en el proceso, por lo que mal se haría en despachar favorablemente las pretensiones de la demanda, si las mismas no encuentran sustento en el acervo probatorio; de ser así, se estaría, notoriamente, enervando el principio en comento, además del debido proceso.

Bajo la misma línea, el artículo 167 ibídem, indica que corresponde a las partes acreditar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones. Al respecto, la H. Corte Constitucional³⁹, citando a la H. Corte Suprema de Justicia, ha dicho:

³⁹ CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-086 de 24 de febrero de 2016.

“(…) Desde luego, al juez no le basta la mera enunciación de las partes para sentenciar la controversia, porque ello sería tanto como permitirles sacar beneficio del discurso persuasivo que presentan; por ende, la ley impone a cada extremo del litigio la tarea de traer al juicio de manera oportuna y conforme a las ritualidades del caso, los elementos probatorios destinados a verificar que los hechos alegados efectivamente sucedieron, o que son del modo como se presentaron, todo con miras a que se surta la consecuencia jurídica de las normas sustanciales que se invocan (...)”.

Es claro entonces que, acreditar los supuestos de hecho que respaldan las pretensiones de la demanda, constituye, en ese caso, una carga procesal en cabeza de la parte demandante. En la misma sentencia, retomando jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, se ha indicado lo siguiente con relación a las cargas procesales.

*“(…) las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. **Así, por ejemplo, probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa (...)**”* Negrita por fuera del texto original.

Queda entonces, ampliamente probado, que estaba a cargo del demandante, arrimar al proceso las pruebas que sustentaran sus pretensiones; sin embargo, en el presente caso, la parte actora se sustrajo de dar cumplimiento a la citada carga. Adviértase, por ejemplo, que de acuerdo al escrito demandatorio se presentó primer lugar, una solicitud indemnizatoria por la suma total de **\$12.121.299**, por concepto de **daño emergente**, la cual se discriminó así: **(i)** \$6.800.000 por la pérdida total de la motocicleta de placa MWC 51E; y **(ii)** \$5.321.299, por los gastos de transporte posteriores a la fecha de ocurrencia del accidente, que corresponden a los desplazamientos de la víctima y de sus familiares para atender diligencias relacionadas con el estado de salud.

En ese orden de cosas, se debe señalar que, para que proceda una indemnización por este concepto, no basta con manifestar que, con ocasión del supuesto perjuicio, que se endilga haber causado los demandados, se ha incurrido en una serie de gastos, sino que es deber de la parte actora probar de manera idónea e inequívoca, en primer lugar, que efectivamente se ha incurrido en esos gastos, aportando las facturas o documentos equivalentes con todos los requisitos exigidos por la Ley, y en segundo lugar, que dichos gastos guarden una relación directa con los hechos manifestados con la demanda, y en el caso de marras, tenemos que los documentos con los cuales se pretende soportar los supuestos gastos en que ha incurrido el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, no cumplen con los requisitos que establece el Estatuto Tributario y la DIAN, para que sean considerados facturas o documentos equivalentes.

Ahora bien, frente a cada uno de los conceptos y sumas reclamadas a título de daño emergente por la parte actora, es pertinente realizar los siguientes cuestionamientos:

- i) **Pérdida total de motocicleta.** Ahora bien, respecto al pago que se solicita a título de daño emergente, por la suma de **\$6.800.000**, por concepto de la pérdida total de la motocicleta de placa MWC 51E; es importante precisar que conceptualmente, el daño emergente está definido como aquellos valores que salen del patrimonio de una persona, como consecuencia de determinado hecho, que genera o representa un detrimento económico para sí. De allí que, las meras expectativas que no puedan cuantificarse, tal y como ocurre en este caso, donde se aporta un simple extracto de la guía de valores del

Fasecolda, en la que se relaciona el valor de la referida motocicleta, no puedan catalogarse como un daño emergente, susceptible de reconocimiento económico, pues **nada comprueba que la motocicleta haya quedado inservible**, es decir que haya sido una pérdida total; de hecho, en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito se indicó que la motocicleta solo “(...) *presenta daños lateral derecho* (...)”.

En segundo lugar, bajo el hipotético supuesto de haberse producido la pérdida total, de todos modos, no se probó que ello representaría una pérdida en el patrimonio del demandante, puesto que no se aportó el certificado de tradición de la motocicleta, o la licencia de propiedad siquiera, que acredite que el vehículo era de su propiedad para la fecha de los hechos.

- ii) **Por el valor de los transportes.** En lo que atañe a los gastos de transporte, en cuantía de **\$5.321.299**. Como se expresó en líneas precedentes, para que sea reconocida una indemnización por daño emergente, es imperioso demostrar de manera fehaciente, que quien pretende tal indemnización en efecto sufrió un desmedro en su patrimonio. Tal demostración debe realizarse por medio de los documentos que legalmente acrediten la erogación, tal como una factura o un documento equivalente, **este último aparejado del RUT de quien lo expide**. La parte actora pretende que con la sola relación de unos valores que aportó con la demanda sea tenida en cuenta como soporte, siendo que con ello no se está acreditando ningún perjuicio, ni tampoco constituye un documento idóneo para su demostración, lo cual hace imposible su reconocimiento.

También se relacionaron cuatro cuentas de cobro emitidas, presuntamente por el señor Juan Davis Chávez Contreras, en las que se consigna que la víctima directa le debe la suma total de \$4.380.000, por concepto de transporte en el vehículo de placa KLQ407, desde el día 24 de marzo del 2020 al 27 de julio del 2020; sin embargo, no se acompañó junto con dichas cuentas de cobro, la cédula de quien la emitió, el certificado de tradición o licencia del automotor en el cual se realizó el transporte, ni mucho menos, la relación de las supuestas citaciones médicas o la constancia de asistencia a las mismas.

Finalmente, señalo que, en tanto que todos estos documentos, con los que se pretende acreditar la causación del daño emergente, provienen de terceros, deberá comparecer ante su Despacho la persona que los emitió, con el propósito de que, conforme lo establece el artículo 262 del Código General del Proceso, se ratifique su contenido; puesto que esta norma faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria, conforme se procederá a solicitar al Juzgador.

Con todo, recuerdo que el daño emergente corresponde a la pérdida económica por la destrucción a puesta en peligro del bien jurídico y todos aquellos gastos, erogaciones o desembolsos que necesariamente debe hacer una persona para atender todo lo relacionado con la vulneración del mismo o las secuelas que este deja. En este caso, en la demanda se habla de unos gastos sin respaldos probatorios suficientes, de manera que hay ninguna comprobación de que los mismos se hayan casados, por lo que de entrada es una petición indemnizatoria cuyo reconocimiento trasciende imposible, haciéndose menester que el Juzgador despache desfavorablemente esta pretensión.

De otra parte, se solicitó a favor del señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** la suma **\$48.260.285,6** a título de **lucro cesante consolidado** y de **\$392.124.285,25**, por **lucro cesante**

futuro. Montos a los que me opongo rotundamente a su reconocimiento, puesto que, por deficiencia probatoria, trasciende a todas luces imposible de atender.

Primero que nada, se observa que la liquidación efectuada por la parte demandante adolece de error grave al desconocer la técnica de liquidación fijada por la H. Corte Suprema de Justicia de Colombia, así como también fundamentarse en datos que no son veraces, razón por la cual debe desestimarse. En segundo lugar, se deberá tener en consideración que, pese a que la liquidación efectuada en la demanda, toma como base el salario que, presuntamente, el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** devengaba para la fecha de los hechos, justificada en la “certificación de nómina” expedida por el tesorero general de la Policía Nacional y que se llagó a la demanda, lo cierto es que, este documento por sí solo no acredita el ingreso del accionante. En efecto, la suma de \$3.880.678,34, indicada en dicha constancia, hace referencia al salario devengado al momento de su emisión, esto es, el 31 de agosto del 2021 y no refiere que ese rubro haya sido el percibido por la víctima al momento del accidente, el cual acaeció casi dos años atrás; en este orden de ideas, deberá acreditarse este particular debidamente por el extremo actor.

En tercer lugar, el reconocimiento de la suma solicitada, especialmente por concepto de lucro cesante futuro, es claramente improcedente, pues si partimos de la definición misma de lucro cesante descrita en el artículo 1614 del Código Civil como “(...) *la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento (...)*” negrita por fuera del texto original; se tiene palmariamente que, en el caso que nos ocupa, no se es posible hablar de la materialización de este perjuicio, habida cuenta de que, además de que no existen elementos que acrediten la responsabilidad de la parte pasiva, adicionalmente, se tiene que se aportó una certificación laboral que desacredita la causación de este perjuicio.

Es importante aclarar y resaltar que, de acuerdo con lo que a lo largo de la demanda se manifiesta, como resultado del presunto accidente, el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** se ha visto imposibilitado para obtener recursos económicos necesarios para su subsistencia, no obstante, de acuerdo con la relación que se aportó con el libelo genitor, en concreto con la certificación laboral emitida por la Policía Nacional, el accionante se encuentra laborando en dicha institución, percibiendo un salario de \$3.880.678,34, el cual se ha visto reducido por obligaciones propias del demandante.

De manera que, no resulta válida la afirmación de que, como resultado de los hechos supuestamente acaecidos el 17 de noviembre del 2019, el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, hubiera dejado de percibir un ingreso económico que le permitiera su subsistencia, puesto que la misma prueba documental por él incorporada acreditaría que con posterioridad al evento reprochado, sí continuó recibiendo ingresos. Así entonces, desacreditada se encuentra la aseveración que el hecho demandando causó un lucro cesante consolidado o futuro al accionante, puesto que este mismo confesó con la incorporación de este documento, que no ha dejado de percibir ingresos.

No puede pasarse por alto que en lo que atañe al lucro cesante, la H. Corte Suprema de Justicia, ha trazado algunas pautas para su entendimiento, y al respecto dijo: “(...) *En efecto, en cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual (...)*”⁴⁰ Negrita por fuera del texto original.

⁴⁰ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia 055 de 24 de junio del 2008, Expediente 2000-01141-01.

En otras palabras, el rubro lucro cesante no indemniza la pérdida basada en una mera expectativa o probabilidad de beneficios económicos, **sino el daño que supone privar la obtención de dividendos a los cuales habría tenido derecho la víctima de no haber ocurrido el hecho,** pero bajo el esquema de una privación de ganancia cierta. Por lo tanto, existe un razonable juicio de posibilidad, relativo a la concreción de un resultado útil donde se combinan la certidumbre y la fluctuación, pero partiéndose de la base de que el afectado se hallaba en una posición de privilegio que le permitiría obtener un beneficio, y el actuar ilícito de otra persona le impide fructificar tal situación de prosperidad. Entonces demostrado una vez demostrado el hecho y el daño, es preciso que se acredite que el demandante, de manera incuestionable, se encuentra privado de percibir un ingreso económico; situación que, conforme lo expuesto arriba se desacreditó en este caso.

De tal suerte, es evidente que, con la con la manifestación esbozada en esta pretensión indiscutiblemente el extremo actor desea lucrarse, pues un eventual reconocimiento a título de lucro cesante consolidado o futuro, resultaría en sumo grado injustificado, por la carencia de pruebas de la demanda aportada, lo cual cimienta esta oposición. Por lo que la liquidación resulta, además, exagerada y carente de soporte probatorio adicional que la demuestre, y en ese sentido, debe tenerse como mal realizada, y la petición indemnizatoria debe negarse.

También solicitó el extremo demandante una indemnización por concepto de **daño moral**, por la suma total de **480 SMMLV**, pretensión frente a la que me opongo, toda vez que, no se han allegado al expediente elementos de prueba con la virtualidad demostrativa suficiente para dar por acreditado la causación de este perjuicio en los términos de la demanda. Si bien con el escrito genitor se allegó la Historia Clínica de la víctima directa y un informe psicológico, en la que se registró que aquel habría sido evaluado por psicología (en los que se manifestó por el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** haber sufrido un detrimento emocional por los hechos acaecidos el 17 de noviembre del 2019), lo cierto es que, extrañamente, el informe se elaboró hasta casi dos años después de ocurrido el accidente.

Como podrá observar el Juzgador, el evento aquí reprochado habría sucedido el 17 de noviembre del 2019, y la consulta a la que acudió el demandante, habría sido para el mes de septiembre del 2021, de manera que no se conoce a ciencia cierta si fue en efecto el evento aquí demandado el que habría causado la condición psicológica en la que se aduce que se encuentra el accionante. Si ello hubiera sido así, las reglas de la experiencia y la lógica dictan que se habría presentado la necesidad de acudir al psicólogo, mucho tiempo antes, cuando el evento había apenas ocurrido; sin embargo, en este caso no se explica por qué el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** acude al tratamiento ya transcurrido más de un año del aludido accidente; por lo que no guarda suficiente credibilidad lo referente a esta documentación.

De otro lado, no hay absolutamente ninguna prueba que permita la acreditación del supuesto daño moral de los familiares de los demandantes, en concreto en relación con aquellos que se encuentran en el segundo y tercer grado de consanguinidad, frente a los cuales el perjuicio moral no es susceptible de presumirse. En efecto, no obra Historia Clínica o dictamen por psicología o siquiera concepto médico que permita inferir la producción del daño emocional y psicológico que se aduce sufrieron los hermanos y el primo del señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL**, por lo que es una manifestación que no puede tenerse por cierta.

En vista de lo precedente, será menester que el Despacho tenga en consideración todos los demás elementos de prueba que se alleguen al plenario, para efectos de definir lo relativo al origen de la pérdida de capacidad de la accionante, y su nexo causal con los hechos que aquí se demandaron.

En este punto, considero esencial que el Despacho tenga en cuenta el precedente jurisprudencial, luego que, cuando se ha probado fehacientemente el tipo de perjuicio que en este caso alega, la H. Corte Suprema de Justicia ha manifestado que,

*“(…) Perjuicio inmaterial por daño moral. En lo atañadero al perjuicio moral subjetivo se reconocerá porque resulta indudable la aflicción y congoja que a Diana Carolina Beltrán Toscano le produce la secuela dejada por el accidente de marras consistente en «perturbación psíquica de carácter permanente» y «deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanentes» [fl. 12 c-5], pues es profundamente penoso, mucho más para una dama en la flor de su juventud, ver en su cuerpo cicatrices que antes del insuceso no estaban y **ser consiente que sus funciones psicológicas se encuentran alteradas no transitoriamente sino por el resto de sus días**, así la estética médica logre arrasarlos, lo cual conlleva al quebrantamiento indiscutible de caros derechos de la personalidad y de la autoestima.*

*(…) Recuerda la Corte, éste perjuicio no constituye un «regalo u obsequio gracioso», tiene por propósito reparar «(…) in casu con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa», de acuerdo con el ponderado arbitrio iudicis, «sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia, derrotero y compromiso ineludible de todo juzgador» , **por tanto, es procedente fijar el monto de la condena por este aspecto en la suma de quince millones de pesos (\$15.000.000)** (….)”⁴¹. Negrita por fuera del texto original.*

Así entonces, frente a los perjuicios que se derivan de las presuntas lesiones del señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** se encuentra que en un escenario en el que el perjuicio ha sido superior al que en este caso se indica por el accionante (conforme a lo pretendido y probado específicamente en este concepto indemnizable de la demanda), la H. Corte Suprema de Justicia ha determinado el valor máximo de **\$15.000.000** para la víctima directa y para aquellos en el primer grado de consanguinidad, monto mucho menor al que aspira el actor. Por ello, surge menester que en el eventual e hipotético caso de reconocerse que hay lugar a indemnizar el daño que se aduce se ha ocasionado como resultado de las presuntas lesiones de aquella, su reparación se otorgue, una vez esté diáfananamente probada la responsabilidad de la demandada, confrontando el precedente jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia en la materia y limitándolo a los montos que a derecho correspondan.

También se deberán tener en cuenta los parámetros establecidos por el órgano de cierre de la Jurisdicción Civil, quien estipuló en Sentencia SC15996-2016 de noviembre 29 de 2016, un tope máximo de **\$60.000.000 en caso de muerte**, siendo este un criterio para ir determinando gradualmente el perjuicio en caso de lesiones, de suerte que, de ninguna manera, la petición de las actrices podría superar si quiera el 50% del mencionado valor.

No está de más recordar que es el Juez en el desarrollo de la etapa probatoria quien determinará si efectivamente hubo responsabilidad a cargo de los aquí demandados, y en caso de que este improbable suceso ocurra, atendiendo las circunstancias específicas del caso, entrará a determinar el verdadero grado de afectación del demandante y fijará los montos de indemnización a que haya lugar, sin que estos puedan exceder los límites fijados por el Máximo Tribunal de lo

⁴¹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia SC5885-2016 del 06 de mayo del 2016. M.P.: Dr.: Luis Armando Tolosa Villabona.

Contencioso Civil, respecto de la reparación o compensación de los perjuicios inmateriales, en este caso, frente al daño moral.

De otro lado, se solicitó en la demanda una indemnización por concepto de **daño fisiológico o a la vida de relación**, por la suma total de **480 SMMLV**. Pretensión frente a la cual reitero que me opongo. Como se advirtió precedentemente, si bien con la demanda se allegó la Historia Clínica de la víctima directa en la que se registró que aquel habría estado acudiendo a controles por psicología, estos iniciaron más de un año después de ocurrido el accidente; de manera que no se conoce a ciencia cierta si fue en efecto el evento aquí demandado el que habría causado la condición psicológica en la que se aduce que se encuentra el accionante. Las reglas de la experiencia y la lógica dictan que, de haber un nexo causal, se habría presentado la necesidad de acudir al psicólogo, mucho tiempo antes, cuando el evento había apenas ocurrido; sin embargo, en este caso no se explica por qué el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** acude al tratamiento ya transcurrido más de un año del aludido accidente; por lo que no guarda suficiente credibilidad lo referente a esta documentación.

Y de otro lado, si bien obra un dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral este no evidencia un estado de invalidez o una pérdida de capacidad total ni permanente, que le imposibilite de manera definitiva al señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** desarrollar actividades laborales, sociales y familiares de una manera suficientemente adecuada. Es un porcentaje que permite inferir que puede tener una vida en condiciones suficientemente normales. Además, los controles por psicología, los cuales habrían derivado a la determinación del porcentaje indicado, se iniciaron por la demandante cuando ya había transcurrido más de un año del accidente de tránsito, por lo que realmente no existían elementos suficientes para que si quiera se determinara el porcentaje que la Junta concluyó.

Por lo dicho, es indispensable que el Despacho tenga en consideración todos los demás elementos de prueba que se alleguen al plenario, para efectos de definir lo relativo al origen de la pérdida de capacidad de la accionante, y su nexo causal con los hechos que aquí se demandaron.

Además, el daño a la vida de relación como perjuicio autónomo, eventualmente **se reconoce a la víctima directa**, siempre y cuando se demuestre su efectiva realización, en tanto que no es objeto de presunción, probando que antes del hecho dañoso realizaba actividades que de alguna manera hacían más agradable la vida pero que a raíz del suceso se encuentra impedido para realizarlas nuevamente. De manera que este es un concepto que puede ser reconocido únicamente a la víctima directa de una lesión y no a los familiares de la misma; por lo que el perjuicio solicitado a los demás accionantes trasciende improcedente.

Se resalta en todo caso que, si bien el señor **MARIO ALEJANDRO BASTOS SANDOVAL** indica que se le causaron unas secuelas que repercuten en su vida diaria y explica en este acápite cuáles fueron dichas secuelas y cómo es que las mismas tienen incidencia en el desarrollo normal de sus actividades diarias, no se identifica ni aborda cómo es que ese mismo escenario causó un daño fisiológico o a la vida de relación de los demás demandantes, ni qué actividades realizaban aquellos antes del evento y por qué es que a raíz del accidente ya no les es posible practicarlas. En ese orden de ideas, se deberá tener en cuenta que el eventual resarcimiento de los supuestos perjuicios por daño a la vida de relación, debe estar completamente delimitado a la demostración del mismo, y que este nunca podrá ser superior a la verdadera magnitud del daño causado.

Concretamente, debe destacarse que la suma pretendida resulta abiertamente desproporcionada, y contraría los parámetros establecidos por la H. Corte Suprema de Justicia.

En efecto, la mentada Corporación en Sentencia SC2107-201810, resolvió el daño a la vida de relación en la suma equivalente a **25 SMMLV**, como a continuación se reseña, en un caso donde la pérdida de la capacidad laboral ascendía al 39.45%, es decir, comportando casi igual gravedad para la víctima. Brevemente se reseña que la citada Corte resolvió la indemnización de perjuicios reclamadas con ocasión a un accidente donde al actor le fue amputada la pierna derecha. La sentencia que puso fin al proceso resolvió frente al citado daño lo siguiente:

“(...) Respecto a la alteración de las condiciones de existencia relacional o daño a la vida de relación, ... se calcularán, según lo determinó el ad-quem, en veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes (...)”

Con todo, no resulta aceptable que en el hecho que motivó la controversia y que resulta mucho menos gravoso para el demandante, se tase en una suma excesiva y desbordada.

Por último, en la demanda se solicita el pago de la suma total de **480 SMMLV**, por concepto de **daño al proyecto de vida**. Pretensión frente a la que me opongo, en primer lugar, como quiera que **ese concepto NO corresponde una tipología de perjuicio autónomo que sea reconocida por la H. Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia.** Efectivamente, la afectación del proyecto de vida, se trata de un concepto indemnizable que se encuentra subsumido en el concepto de daño a la vida de relación, por lo que reconocer este perjuicio, que por demás no está acreditado, se constituiría en una doble indemnización injustificada, y consigo en un enriquecimiento sin causa probada.

La jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia ya ha dejado suficientemente claro que el daño a la vida de relación comprende también la alteración a las condiciones de existencia generada por la mutación del proyecto de vida. En ese sentido, la afectación al proyecto de vida no se trata de un concepto autónomo como aparentemente lo pretende hacer ver la parte demandante, sino que se encuentra dentro de la conceptualización del daño a la vida de relación, por lo que, un eventual e hipotético reconocimiento del concepto de daño a la vida de relación, implicaría el resarcimiento por la modificación al proyecto de vida que se aduce en esta pretensión.

En todo caso, se insiste, no hay ningún elemento de prueba que milite en el plenario que nos lleve a afirmar o si quiera a inferir que a la activa de esta acción se le ocasionó un perjuicio de tal naturaleza, por lo que, por la completa ausencia de medios de convicción, el juzgador deberá tener lo manifestado en esta pretensión como no cierto por no estar debidamente acreditado.

Con todo, y en ocasión de la falencia probatoria y de la deficiente descripción y cálculo inadecuado de la presunta causación de los perjuicios invocados en el libelo genitor, no podría considerarse como probada ni atenderse de manera favorable lo relacionado con la valoración indemnizatoria por daño moral, daño a la vida de relación, daño al proyecto de vida, ni por lucro cesante, ni daño emergente,; así entonces, solicito respetuosamente a su Despacho las tenga como no probadas y se sirva declarar como acreditada esta excepción formulada en favor de los derechos e intereses de mi prohijada.

- **INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE ALLIANZ SEGUROS S.A. Y EL SEÑOR SANTIAGO BEDOYA RAMIREZ.**

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de

mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

Debe aclararse que las obligaciones de la Compañía Aseguradora que represento están determinadas únicamente por el contrato aseguratorio documentado en la **Póliza de Automóviles Autos Clónico No. 022371551 / 547, vigente desde el 31 de diciembre del 2018 hasta el 30 de diciembre del 2019**, y no, por la responsabilidad civil que pueda o no atribuirse eventualmente sobre los hechos al señor SANTIAGO BEDOYA RAMIREZ, luego que como es evidente, en ellos mi representada no tuvo participación alguna.

Así mismo, se aclara que la participación que ostentaría eventualmente mi prohijada en el asunto debe determinarse únicamente por el objeto de cada amparo sus límites, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria de mi mandante está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales, es decir, con sujeción a las condiciones de la póliza.

En orden de lo anterior, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

- **INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE ALLIANZ SEGUROS S.A. POR CUANTO NO SE REALIZÓ EL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES AUTOS CLÓNICO No. 022371551 / 547, VIGENTE DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Esta excepción se sustenta en que **ALLIANZ SEGUROS S.A.** sólo está llamada a responder al tenor de las obligaciones contractuales pactadas en la **Póliza de Automóviles Autos Clónico No. 022371551 / 547, vigente desde el 31 de diciembre del 2018 hasta el 30 de diciembre del 2019**, siempre que el evento asegurado efectivamente se materialice; luego no puede entenderse comprometido al asegurador por riesgos que no acontecieron.

Debe advertirse Señor Juez que la responsabilidad de la Compañía de seguros está delimitada estrictamente por el amparo que se otorgó, como lo confirma el examen del texto del contrato de seguro, que enmarca las obligaciones que contrajo, amparo que, como es apenas lógico, deberá hacerse efectivo una vez el siniestro acaezca. Ajustándonos a las condiciones del negocio aseguratorio expedido por ella y documentado en la **Póliza de Automóviles Autos Clónico No. 022371551 / 547, vigente desde el 31 de diciembre del 2018 hasta el 30 de diciembre del 2019**; al respecto, se debe resaltar que amparo de responsabilidad civil extracontractual se circunscribió de la siguiente manera:

6. Responsabilidad Civil Extracontractual

La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el lucro cesante y daño moral, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados, que cause el asegurado o el conductor autorizado con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley, proveniente de un accidente de tránsito ocasionado por el vehículo descrito en esta póliza.

El valor asegurado, señalado en la carátula de la póliza, representa el límite máximo de la indemnización a pagar por daños a bienes de terceros y/o muerte o lesiones a terceras personas. Este monto asegurado se considera como límite único combinado restituible por evento.

En efecto el amparo de responsabilidad civil extracontractual otorgado y plasmado en la carátula de la mencionada póliza, opera **siempre y cuando se demuestre fehacientemente la configuración de la responsabilidad civil extracontractual** y consecuentemente, se acrediten debidamente los perjuicios alegados por los afectados; sin embargo, del acervo probatorio que obra en el plenario, únicamente se evidencia que existió colisión entre dos vehículos que desempeñaban una actividad peligrosa, sin que existan pruebas determinantes que permitan afirmar que el responsable de dicha colisión, haya sido el vehículo de placa **DLP452**, conducido por el señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ. Por lo anterior, **el accidente de tránsito ocurrido el 17 de noviembre del 2019, no correspondió bajo ningún escenario a un siniestro amparado por la Póliza que mi mandante expidió.**

Entonces, teniendo en cuenta que es inexistente el derecho a la indemnización o pago reclamado por el demandante, claramente se tiene que no ha surgido la obligación que la accionante predica a cargo de la compañía aseguradora demandada. La obligación del asegurador no nace en cuanto no se cumpla la condición pactada en el contrato para su surgimiento, es ella precisamente la realización del riesgo asegurado o siniestro, es decir, que el evento en cuestión efectivamente esté previsto en el amparo otorgado, siempre y cuando no se configure una exclusión u otra causa convencional o legal que la exonere de responsabilidad.

Por ende, la eventual obligación indemnizatoria está supeditada al contenido de la póliza, es decir a sus diversas condiciones, al ámbito del amparo, a la definición contractual de su alcance o extensión, a los límites asegurados para cada riesgo tomado, etc. Al respecto siempre se deberá atender a los riesgos asumidos por la convocada, los valores asegurados para cada uno de los amparos, el deducible pactado, etc. La condición de la que pende el nacimiento de la obligación indemnizatoria, según lo pactado en el contrato respectivo, no se realizó y por ello no se cumplió el riesgo asegurado bajo la correspondiente póliza, debido a la configuración de una causal de exoneración de responsabilidad como lo es la fuerza mayor.

Finalmente, sin que implique de ninguna manera aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada, en gracia de discusión, de darse por realizado el riesgo asegurado, es menester indicar que el seguro cuenta con los límites y las exclusiones que se hayan pactado con el asegurado, por lo tanto, no es posible que se condene de forma solidaria cuando solo puede responder hasta donde lo establecido en el contrato de seguro se permita.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

- **MARCO DE LOS AMPAROS OTORGADOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE SEGURO CONTENIDO EN LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES AUTOS CLÓNICO No. 022371551 / 547, VIGENTE DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Esta excepción se plantea en gracia de discusión, y sin que esto implique que se está asumiendo responsabilidad alguna por parte de mi procurada, para efectos de explicar en primer lugar, que en el ámbito de libertad contractual que les asiste a las partes en el contrato de seguro, la parte aseguradora puede asumir a su arbitrio todos o algunos de los riesgos a que está expuesto el interés asegurado, en virtud de la facultad que se consagra en el artículo 1056 del Código de Comercio.

Es de esta forma como al suscribir el contrato aseguratorio respectivo, la Aseguradora decide otorgar determinados amparos supeditados al cumplimiento de ciertas condiciones generales y particulares estipuladas en el mismo acuerdo, de manera que su obligación condicional sólo será exigible si se cumplen con los presupuestos que hayan sido pactados por las partes.

En otras palabras, las Compañías Aseguradoras tienen la libertad de escoger cuáles riesgos les son transferidos y en este sentido, sólo se ven obligadas al pago de la indemnización en el evento que sean estos riesgos los que acontezcan durante el desarrollo de la relación contractual. La H. Corte Suprema de Justicia ha sido enfática al resaltar que las compañías aseguradoras pueden, a su arbitrio, asumir los riesgos que consideren pertinentes:

“(…) como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha extraído, con soporte en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento “de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. Sin perder de vista la prevalencia del principio de libertad contractual que impera en la materia, no absoluto, según se anunció en líneas pretéritas, se tiene, de conformidad con las consideraciones precedentes, que es en el contenido de la póliza y sus anexos donde el intérprete debe auscultar, inicialmente, en orden a identificar los riesgos cubiertos con el respectivo contrato asegurativo. Lo anterior por cuanto, de suyo, la póliza ha de contener una descripción de los riesgos materia de amparo (n. 9, art. 1047, C. de Co.), en la que, como reflejo de la voluntad de los contratantes, la determinación de los eventos amparados puede darse, ya porque de estos hayan sido individualizados en razón de la mención específica que de ellos se haga (sistema de los riesgos nombrados) (...)”⁴²

Entre las condiciones que se pueden pactar por los contratantes, es posible encontrar la determinación de los amparos, los límites temporales, territoriales, sobre la cuantía y de la ocurrencia de circunstancias específicas. En esa categoría, la relación sustancial que rige la vinculación de mi prohijada, necesariamente se regirá o sujetará a las diversas condiciones del contrato de seguro, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo, así como sus límites, sumas aseguradas, deducibles (que es la porción que de cualquier siniestro debe asumir la entidad asegurada), las exclusiones de amparo, etc., luego son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el Juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto de la relación sustancial que sirve de base para vincular a mi prohijada, al contenido de las condiciones de la correspondiente póliza y de sus anexos.

Consecuentemente, como ya se ha venido explicando, la posibilidad de que surja responsabilidad de la Aseguradora depende estrictamente de las diversas estipulaciones contractuales, frente a los hechos que se prueben en el proceso, ya que su cobertura exclusivamente se refiere a los riesgos asumidos, según lo pactado y no a cualquier evento, ni a cualquier otro riesgo no previsto convencionalmente, o excluido de amparo.

En nuestra legislación de seguros se consagra la posibilidad de amparar eventos basándose en el descubrimiento de los mismos, mecanismo por el que se puede optar en contratos de Seguro de Responsabilidad Civil, pero obviamente ello no va en perjuicio de la mencionada facultad del asegurador, la de delimitar contractualmente los riesgos que asume, conforme a la potestad estatuida legalmente (artículo 1058 del Código de Comercio). De forma que, en armonía con esa regulación, cuando se trate de concertar esta clase de seguros puede el asegurador delimitar factores temporales o espaciales, por ejemplo, definiendo la época de acaecimiento de los sucesos o las situaciones, así como el momento de su conocimiento o descubrimiento y de ahí

⁴² CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez. SC4574-2015. Radicación No. 11001-31-03-023-2007-00600-0.

la oportunidad de la información o aviso al asegurador sobre las mismas, o precisando el lugar geográfico de su realización, etc., para que puedan considerarse amparados.

En efecto, en materia de seguros, el asegurador, según indica el artículo 1058 del Código de Comercio: “(...) *podrá, a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado o la cosa asegurados* (...)”, por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que amparo opera o es efectivo, - las causales de exclusión o en general las de exoneración, además de las de origen legal, etc., y por tanto, son esos los parámetros a los que tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la póliza vinculada.

En virtud de este escenario contractual, en el momento en el que el Juzgador resuelva lo referido a la vinculación de mi representada, deben respetarse también el contenido de las coberturas y los límites máximos amparados, luego que, de no hallarse enmarcada dentro de estos parámetros, tal y como se acreditó en los acápites anteriores, resultaría imposible la afectación de la **Póliza de Automóviles Autos Clónico No. 022371551 / 547, vigente desde el 31 de diciembre del 2018 hasta el 30 de diciembre del 2019**, y la Compañía estaría exenta de obligación contractual alguna.

En orden de lo anterior, solicito respetuosamente al Despacho, sea tenida por probada la presente excepción.

- **LÍMITES MÁXIMOS DE LA COBERTURA PACTADA EN LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES AUTOS CLÓNICO No. 022371551 / 547, VIGENTE DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

La presente excepción se formula exclusivamente en gracia de discusión, y para efectos de ilustrar al Despacho que, como se ha expuesto incansablemente, la responsabilidad de la Compañía a la que represento está limitada por los amparos efectivamente otorgados y la suma asegurada o a los sublímites que por evento eventualmente se han pactado respecto de aquellos amparos.

Para ello, y sin que ninguno de los argumentos presentados en este acápite signifique reconocimiento de responsabilidad alguno, expondré que, en cada uno de los amparos contratados en la **Póliza de Automóviles Autos Clónico No. 022371551 / 547, vigente desde el 31 de diciembre del 2018 hasta el 30 de diciembre del 2019**, expedida por **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, se limitó el valor de la suma asegurada y, por ello, en gracia de discusión, considero oportuno señalar dichos montos asegurados.

Coberturas		
Amparos	Valor Asegurado	Deducible
Responsabilidad Civil Extracontractual	4.000.000.000,00	0,00
Asistencia Jurídica en Proceso Penal y Civil	25.000.000,00	0,00
Pérdida Parcial por Daños de Mayor Cuantía	15.929.600,00	0,00
Pérdida Parcial por Daños de Menor Cuantía	15.929.600,00	900.000,00
Pérdida parcial por Hurto de Mayor Cuantía	15.929.600,00	0,00
Pérdida Parcial por Hurto de Menor Cuantía	15.929.600,00	900.000,00
Temblor, Terremoto, Erupción Volcánica	15.929.600,00	900.000,00
Asistencia	Incluida	0,00
Vehículo de Reemplazo	Incluida	0,00
Gastos de Movilización Pérd. Mayor Cuantía	1.200.000,00	0,00
Accidentes Personales	50.000.000,00	0,00
Amparo Patrimonial	Incluida	

La suma asegurada constituye el límite máximo al que se obliga el asegurador a responder de acuerdo al contrato suscrito; de esa forma, el monto máximo de su responsabilidad indemnizatoria, que en este caso asciende a \$4.000.000.000 de acuerdo con el límite del amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual, bajo ninguna circunstancia, puede superar el valor de la suma asegurada en la póliza. Así, en tanto que la relación jurídico sustancial que vincula a mi representada al presente proceso está estrictamente regulada y regida por las condiciones del contrato de seguro y la ley; en ese sentido, su responsabilidad no puede superar la suma asegurada que se pactó en el contrato de seguro ya que esa es la única forma de mantener el equilibrio económico que motivó a mi procurada a asumir el riesgo asegurado.

Por todo lo anterior, en gracia de discusión y sin que implique que mi mandante asume responsabilidad alguna, ruego al Despacho tenga en cuenta las coberturas que en efectos e pactaron en la póliza vinculada en esta contienda, así como los límites que se ha puesto de presente; en ese orden de ideas, solicito al Juzgador respetuosamente se sirva declarar probada esta excepción.

- **CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE COBERTURA DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES AUTOS CLÓNICO No. 022371551 / 547, VIGENTE DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

En gracia de discusión y sin que la presente constituya el reconocimiento de obligación alguna de mi representada, se formula esta excepción, toda vez que considero necesario dejar en claro al Despacho desde ya que, en las condiciones de la **Póliza de Automóviles Autos Clónico No. 022371551 / 547, vigente desde el 31 de diciembre del 2018 hasta el 30 de diciembre del 2019**, se establecen los parámetros que enmarcan la obligación condicional que contrajo mi representada, y delimitan la extensión del riesgo asumido por ella. En efecto, en ella se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato, y definen de manera explícita las condiciones del negocio aseguraticio.

Ahora bien, tal como lo señala el artículo 1056 del Código de Comercio, el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume: “(...) Art. 1056.- Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (...)”

En virtud de la facultad citada en el referido artículo, el asegurador decidió otorgar determinados amparos, siempre supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, e incorpora en la póliza determinadas barreras cualitativas que eximen al asegurador a la prestación señalada en el contrato, las cuales se conocen generalmente como exclusiones de la cobertura y se encuentran contenidas en las condiciones generales de la misma que se adjuntan con el presente escrito.

En este sentido, en gracia de discusión debe indicarse que, en el evento en el que se lograra acreditar al menos una de las exclusiones consignadas en las condiciones generales o particulares de la referida póliza, no habría lugar a indemnización de ningún tipo por parte de mi representada.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

- **EL SEGURO CONTENIDO EN LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES AUTOS CLÓNICO No. 022371551 / 547, VIGENTE DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019, EXPEDIDO POR ALLIANZ SEGUROS S.A., ES DE CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO.**

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que el demandante pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro de daños que sirvió de soporte a la presente acción, como se consagra en el artículo 1088 del Código de Comercio, que establece que jamás el seguro podrá constituir para el asegurado fuente de enriquecimiento, por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del Asegurador que se enmarca dentro del límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado, como lo ordena el artículo 1089 ibídem, también infringida por la parte activa de esta acción.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la H. Corte Suprema de justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

“(...) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...).”⁴³ Negrita por fuera de texto

Es importante mencionar que la materia propia del seguro de daños, como el que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el artículo 1088 del Código de Comercio. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega; sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

⁴³CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065.

Con la claridad de que el seguro es meramente indemnizatorio, se concluye indiscutiblemente que el siniestro solo se producirá cuando se realice el riesgo estipulado en la convención asegurativa **No. 022371551 / 547, vigente desde el 31 de diciembre del 2018 hasta el 30 de diciembre del 2019**, siempre y cuando genere un efectivo perjuicio al asegurado, requisito éste *sine qua non*; por tanto siendo la del asegurador una obligación de carácter condicional, es claro que el nacimiento de la misma está sujeta inexorablemente al acaecimiento de tal riesgo y la efectiva causación de un perjuicio plenamente determinado y, en tal hipótesis, es el asegurado quien tiene la carga de demostrar el acaecimiento de ese suceso, del daño consecuente y de la cuantificación del mismo, según el artículo 1077 del Código de Comercio; todo lo cual, de acuerdo con las apreciaciones ya manifestadas en los acápites anteriores, no ha sido acreditado por el convocante.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción.

- **EL CONTRATO ES LEY PARA LAS PARTES**

Sin que esta excepción constituya aceptación de responsabilidad alguna, es pertinente mencionar que la obligación de la Aseguradora sólo nace si efectivamente se realiza el riesgo amparado en la póliza y no se configura ninguna de las causales de exclusión o de inoperancia del contrato de seguro, convencionales o legales. Esto significa que la responsabilidad se predicará cuando el suceso esté concebido en el ámbito de la cobertura del respectivo contrato, según su texto literal y por supuesto la obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de mi representada se limita a la suma asegurada, además de que son aplicables todos los preceptos que para los seguros de daños y responsabilidad civil contiene el Código de Comercio, que en su artículo 1079 establece que “(...) *El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada (...)*”.

Se hace imprescindible destacar que la obligación del asegurador no nace en cuanto no se cumple la condición pactada de la que pende para su surgimiento, condición esa que es la realización del riesgo asegurado o siniestro, o sea que el evento en cuestión efectivamente esté previsto en el amparo otorgado, siempre y cuando no se configure una exclusión de amparo u otra causa convencional o legal que la exonere de responsabilidad, por ende la eventual obligación indemnizatoria está supeditada al contenido de cada póliza, es decir a sus diversas condiciones, al ámbito del amparo, a la definición contractual de su alcance o extensión, a los límites asegurados para cada riesgo tomado, etc..

La póliza utilizada como fundamento contractual de la convocatoria, como cualquier contrato de seguro, se circunscribe a la cobertura expresamente estipulada en sus condiciones, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo, así como sus límites, sumas aseguradas, deducibles (que es la porción que de cualquier siniestro debe asumir la entidad asegurada), las exclusiones de amparo, la vigencia, etc., luego son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el Juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto de la relación sustancial, que sirve de base para vincular a mi mandante en esta causa, al contenido de las condiciones de la póliza.

Consecuentemente la posibilidad de que surja responsabilidad de la Aseguradora depende rigurosamente de las diversas estipulaciones contractuales, ya que su cobertura exclusivamente se refiere a los riesgos asumidos, según esas condiciones y no a cualquier evento, ni a cualquier riesgo no previsto convencionalmente, o excluido de amparo; por ello, al no haberse demostrado la realización del evento asegurado, inadmisiblemente resultaría que, con fundamento en los hechos que hoy son objeto de litigio, se afecte la póliza vinculada y se le exija a mi mandante pago

indemnizatorio alguno; toda vez que, de conformidad con lo ya ampliamente explicado, el contrato se circunscribe únicamente a la cobertura expresamente estipulada en sus condiciones.

En este orden de ideas, solicito respetuosamente al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

- **ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.**

Esta excepción se fundamenta en un hecho que es común denominador de la demanda, es decir, la recurrente alusión a una obligación indemnizatoria inexistente, de manera que, pese a la imposibilidad de prosperidad de las pretensiones indemnizatorias contenidas en la demanda, debe destacarse que no sería viable acceder a las mismas, en cuanto constituyen la búsqueda de indemnización de unos perjuicios frente a los cuales, no se han aportado pruebas que demuestren su fehaciente causación, y frente a los cuales, principalmente, no tiene ninguna injerencia la demandada.

En gracia de discusión si se llegara a proferir una remota condena en contra de la parte demandada y eventualmente de mi procurada, generaría un rubro que no tiene justificación legal ni soporte probatorio alguno, lo que se traduciría en un enriquecimiento sin causa, figura prohibida en nuestra legislación.

De conformidad con lo expuesto, solicito respetuosamente declarar probada la excepción de “enriquecimiento sin causa” planteada en contra de la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

- **GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS.**

Solicito respetuosamente al H. Juez decretar cualquier otra excepción de fondo que resulte probada en curso del proceso, y que pueda corroborar que no existe obligación alguna a cargo de mi procurada y que pueda configurar otra causal que la exima de toda obligación indemnizatoria.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

V. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA DEMANDA.

A. Intervención en las pruebas documentales y testimonios:

Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas. Concretamente ruego al H. Despacho permita la intervención de mi prohijada respecto de los testimonios solicitados por la parte actora de:

- Julio Cesar Solano Cobo (testigo sobre los perjuicios ocasionados).
- James Hernán Basto, (testigo sobre los perjuicios ocasionados).
- Anderson Gonzales Díaz (testigo sobre los perjuicios ocasionados).
- Edwin Heredia Olave (testigo sobre los perjuicios ocasionados).

B. Oposición al informe de reconstrucción de accidentes presentado con la demanda:

Mi representada se opone rotundamente a la prueba documental aportada por la parte actora, consistente en el informe de reconstrucción de accidente de tránsito elaborado por el perito Israel Pino Llantén adscrito a INVESTICAUCA S.A.S, resaltando que pese a que dicho documento no fue aportado como dictamen pericial, ni tienen la virtualidad de serlo por no cumplir con los requisitos señalados en los artículos 226 y 227 del Código General del Proceso, que la ley establece para valorar el concepto pericial emitido por las instituciones o profesionales especializados, este fue relacionado en la demanda por el apoderado de la parte actora, como informes de carácter técnico, utilizados para soportar los supuesta responsabilidad en cabeza del señor SANTIAGO BEDOYA RAMÍREZ.

Por todo lo expuesto, respetuosamente solicito al Despacho separarse del INFORME de “Reconstrucción en 3D de accidente de tránsito” aportado por la parte actora, restándole totalmente valor probatorio, al no cumplir éste con los requisitos de carácter obligatorio que establece la normatividad procesal vigente.

C. Solicitud de contradicción del dictamen emitido por la Junta de Calificación de Invalidez:

En vista de que la parte accionante ha aportado con la demanda dictamen emitido por la Junta de Calificación de Invalidez, solicito respetuosamente al Despacho se sirva convocar a quienes lo emitieron para que acudan a absolver interrogatorio de parte, para efectos de realizar la correspondiente contradicción.

D. Ratificación de documentos provenientes de terceros:

El artículo 262 del Código General del Proceso faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria. Vale la pena resaltar que esta disposición establece una clara consecuencia jurídica ante el evento en que una parte solicite la ratificación del documento y ello no se lleve a cabo:

“(…) Artículo 262. Documentos declarativos emanados de terceros. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación (…)”

Entonces, cabe resaltar que Juez sólo podrá apreciar probatoriamente los documentos cuya ratificación se solicita si efectivamente ésta se hace, como lo consagra el citado artículo. En tal virtud, solicito al Despacho que no se les conceda valor alguno demostrativo a los documentos provenientes de terceros aportados por la parte demandante mientras ésta última no solicite y obtenga su ratificación, de los siguientes:

- Informe psicológico de fecha 8 de septiembre de 2021 realizado por la profesional Nora Beatriz Menza Franco.
- Cuenta de cobro No.001 del mes de abril de 2020 por valor de \$1.320.000, emitida por el señor Juan David Chávez Contreras.
- Cuenta de cobro No.002 del mes de mayo de 2020 por valor de \$1.320.000, emitida por el señor Juan David Chávez Contreras.

- Cuenta de cobro No.003 del mes de junio de 2020 por valor de \$1.020.000, emitida por el señor Juan David Chávez Contreras.
- Cuenta de cobro No.004 del mes de julio de 2020 por valor de \$720.000, emitida por el señor Juan David Chávez Contreras.
- Facturas de once (11) sesiones de terapias físicas realizadas en la ESE, punto de atención de Caldoño, por valor de \$10.000 cada una.
- Factura de venta expedida por COMFANDI por valor de \$14.300.
- Factura de venta expedida por LA ECONOMIA DROGUERIA N° 820 por valor de \$46.450.
- Factura de venta No. DE1647294 expedida por SUPERDROGAS LOS SAMANES #3 SUCURSAL 1 por valor de \$39.900.
- Factura de venta No. 4802 392458 expedida por COPSERVIR por valor de \$74.450.
- Factura de venta No. A11 121909 expedida por DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS por valor de \$8.599.
- Factura de venta No. DE1637482 expedida por SUPERDROGAS LOS SAMANES #3 SUCURSAL 1 por valor de \$54.600.
- Recibo de caja Número 000000000285220 del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN por valor de \$100.000.
- Factura de venta No. DE1637296 expedida por SUPERDROGAS LOS SAMANES #3 SUCURSAL 1 por valor de \$53.000.
- Factura de consulta de primera vez por fisioterapia física realizada en la ESE, punto de atención de Caldoño, por valor de \$14.000.
- Factura de venta N° 2527 expedida por DISTRIDROGAS TODO EN SALUD EXPRESS por valor de \$426.000.
- Informe de investigación y reconstrucción de accidente de tránsito realizado por INVESTICAUCA S.A.S.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito al H. Juez, proceder de conformidad.

VI. SOLICITUD Y APOORTE DE PRUEBAS POR PARTE DE ALLIANZ SEGUROS S.A.

Solicito atentamente decretar y tener como pruebas las siguientes:

A. Documentales:

Solicito se tengan como tales las siguientes, que anexo al presente escrito y/o constan ya en el expediente:

1. Poder Especial otorgado por **ALLIANZ SEGUROS S.A.**
2. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de **ALLIANZ SEGUROS S.A.**
3. Copia de la Póliza de Seguro de Automóviles Autos Clónico No. 022371551 / 547 (Carátula y condiciones generales).

B. Interrogatorio de parte:

Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su Despacho a quienes integran la parte demandante, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos en los que se sustenta la demanda. Esto es, a los siguientes:

- Mario Alejandro Bastos Sandoval (Víctima Directa).

- Ana Sofía Bastos Espinosa (Hija), si para la fecha de la respectiva audiencia ya fuese mayor de edad.
- Idalile María Sandoval Mosquera (Madre).
- Claudia Yarely Bastos Sandoval (Hermana).
- Danna Camila López Bastos (Hija), si para la fecha de la respectiva audiencia ya fuese mayor de edad.
- Santiago Andrés Bastos Sandoval (Hermano).
- Diego Felipe Bastos Sandoval (Hermano).
- Edward Sandoval Mosquera (Primo).

En igual sentido, me reservo el derecho de realizar el interrogatorio de parte al demandado SANTIAGO BEDOYA RAMIREZ, en este litigio.

C. Dictamen pericial de contradicción.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 226 y 227 del Código General del Proceso, anuncio al Despacho que para acreditar la forma en la que habrían ocurrido los hechos demandados y controvertir el informe de reconstrucción de accidentes aportado por el extremo actor, me valdré de dictamen pericial, en el que se efectúe la reconstrucción del accidente de tránsito reprochado, y a suscribir por perito que designe la firma IRS VIAL, el cual no ha sido posible incorporar al proceso, en razón al poco tiempo concedido desde la notificación de la admisión de la demanda.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente al Juzgador proceder de conformidad.

D. Declaración de parte:

En virtud de lo establecido en el artículo 165 y 198 del Código General del Proceso, solicito se decrete la declaración de parte del Representante Legal de **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, del llamamiento en garantía y las excepciones formuladas.

E. Testimoniales:

Respetuosamente solicito decretar la práctica del testimonio de la Dra. **ISABELLA CARO OROZCO**, identificada con cédula de ciudadanía 114.470.541, quien tiene domicilio en la ciudad de Cali y puede ser citada en la Carrera 85 No. 15-88 piso 2 de la ciudad de Cali, Asesora Externa de la **ALLIANZ SEGUROS S.A.** con el objeto de que se pronuncie sobre los hechos en que se fundamentan las excepciones propuestas, y en especial para que deponga sobre las condiciones particulares y generales de la póliza expedida por mi prohijsada y vinculada en este proceso.

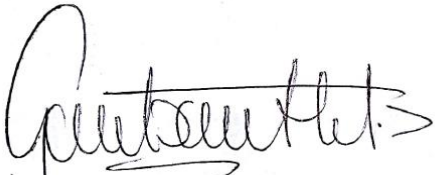
VII. NOTIFICACIONES.

La parte actora recibirá notificaciones en el lugar indicado en el escrito de la demanda.

A mi procurada **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, recibirá notificaciones en la carrera 13 A No. 29-24, piso 8 de la ciudad de Bogotá. Y en la dirección de notificaciones electrónicas notificacionesjudiciales@allianz.co

El suscrito en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Oficina 212 del Centro Empresarial Chipichape, ubicado en la ciudad de Cali, o en la dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

C.C No. 19.395.114 de Bogotá D.C

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.